

LA HORA CRÍTICA

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA COLOMBIA DE URIBE

Al tomar posesión del cargo de presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, los delincuentes se han convertido en la clase dirigente de este país. El padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, a mediados de la década de 1970, había estado ahogándose en las deudas en el barrio de clase medida de los Laureles, en Medellín, cuando un extraño revés de la fortuna le catapultó a la riqueza y le introdujo en la clase dirigente al convertirse en corredor político e intermediario en la transacción de bienes raíces para los narcotraficantes, jactándose de poseer extensas haciendas ganaderas en Antioquia y Córdoba. Uribe Sierra estaba unido por vínculo matrimonial a los Ochoa, una familia de la elite que formaba parte de los pujantes *contrabandistas arribistas*¹ que integrarían el cartel de Medellín; cuando Pablo Escobar lanzó su campaña «Medellín sin barrios pobres» en 1982, Uribe Sierra organizó una carrera de caballos para recaudar fondos para contribuir a la misma. El *fils* [hijo] de Uribe fue destituido de su puesto como alcalde de Medellín por su conspicua asistencia a un encuentro de los carteles de drogas de la región en la *hacienda* de Escobar, Nápoles. Cuando su padre fue asesinado en su rancho en 1983, dejando tras de sí deudas que rondaban los 10 millones de dólares, Alvaro Uribe huyó de allí en un helicóptero de Escobar. Durante el periodo que duró su mandato como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, el «Montesinos» de Uribe, por tomar prestada una expresión de Alfredo Molano, era Pedro Juan Moreno Villa, quien según un antiguo jefe de la DEA [Agencia de Control de Drogas] estadounidense es el importador de permanganato potásico más importante del país, el principal precursor químico en la elaboración de la cocaína².

¹ En castellano en el original. En lo sucesivo, la cursiva en una palabra señala que ésta aparece en castellano en el original [N. de la T.].

² Véase Joseph CONTRERAS, en colaboración con Fernando GARAVITO, *El Señor de las Sombras: Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, 2000, pp. 35-43, 65-72, 92 y 167. Contreras es el editor del *Newsweek* latinoamericano y Garavito es un columnista político recientemente empujado al exilio debido a las amenazas de muerte lanzadas contra él por los paramilitares. Véase Alfredo MOLANO, «Peor el remedio», *El Espectador*, 1 de septiembre de 2002.



Éste es el mayor exponente de la «guerra contra las drogas y el terrorismo» librada por Washington en el hemisferio occidental. En abril de 2003, el Congreso de Estados Unidos concedió a Uribe una suma adicional de 104 millones de dólares que se añaden a los 2.000 millones de dólares, por encima de los dos mil millones de dólares que ya han sido desembolsados desde 1999 conforme a lo previsto en el Plan Colombia. Aunque en otros lugares de América Latina el FMI propugna medidas austeras para conseguir superávit presupuestarios, las necesidades especiales de Colombia son tratadas con indulgencia y su gasto militar se encuentra completamente excluido de los recortes del gasto público exigidos por el Fondo. Respecto a las sobradamente conocidas estadísticas acerca de la espiral de violencia en la que se encuentra sumida Colombia, las mismas también desmarcan a este país del resto de los países latinoamericanos. A mediados de la década de 1990, el índice de homicidios había aumentado hasta alcanzar récords mundiales: 72 de cada 100.000 habitantes, frente a 24,6 en Brasil, 20 en México, 11,5 en Perú y 8 en Estados Unidos. El homicidio es la principal causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres³. En 2001, se cometieron una media de 20 asesinatos políticos al día, aunque debe indicarse que la mayoría de los mismos se produjo dentro de cinco o seis zonas concretas. Aproximadamente la mitad de los secuestros que se cometen anualmente en el mundo tienen lugar en Colombia. En 2001, el 90 por 100 de todos los militantes sindicalistas asesinados en todo el mundo murieron en este país. Además, ocupa el tercer lugar mundial entre los países con el número más elevado de refugiados internos, que alcanza alrededor de 2,9 millones de personas de sus casi 45 millones de habitantes, que han sido expulsadas de sus hogares en las zonas rurales; no resulta exagerado decir que en poco tiempo este país se está convirtiendo en un lugar donde no hay sitio para correr ni rincón donde esconderse.

La ceremonia de nombramiento de Uribe se hizo famosa gracias a 19 bombas de mortero lanzadas hacia donde él se encontraba por las guerrillas de las FARC. Simbólicamente, aunque no consiguieron causar muchos daños al Palacio Presidencial, mataron a 21 personas de los barrios pobres adyacentes. A diferencia, una vez más, de lo ocurrido en El Salvador o en Perú, el Estado colombiano no ha logrado ni neutralizar ni derrotar a sus guerrillas insurgentes, intactas desde la década de 1960. Las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con múltiples bases y una fortaleza en el sureste del país, se estima que cuentan con un número de entre 16.000 y 18.000 guerrilleros. El ELN, o el Ejército de Liberación Nacional, principalmente concentrado en las regiones petroleras del nordeste y en las zonas de exportación del Caribe, está al mando de entre 5.000 y 7.000 combatientes. Su longevidad emula la de

³ Andrés VILLAVECES, «Appendix: A Comparative Statistical Note on Homicide Rates in Colombia», en Charles BERGQUIST *et al.* (eds.), *Violence in Colombia, 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace*, Wilmington, 2001, pp. 275-280.

la exclusión padecida por las demandas populares por parte del sistema político dominante: mientras que en otros lugares las movilizaciones de masas han dado lugar a la creación de nuevos partidos, han forzado cambios en la política y han derrocado a gobiernos, en Colombia nunca se ha permitido al populismo urbano, ni a la socialdemocracia, emerger como fuerza nacional.

Aun así, no se trata de una dictadura. Con la celebración exquisitamente puntual de elecciones presidenciales cada cuatro años, la democracia constitucional colombiana puede vanagloriarse de poseer el régimen bipartidista más longevo de América Latina; pese al hecho de que con frecuencia ambas facciones han hecho correr la sangre de la contraria, el paradigma político clásico—estructurado, siguiendo las líneas ibéricas, por una división oligárquica entre conservadores y liberales— persiste hasta el día de hoy. Naturalmente, este sistema caracterizaba a los Estados latinoamericanos recién independizados de principios del siglo XIX, en los que una elite gobernante de propietarios de tierras, abogados y comerciantes que manipulaba un restringido sistema de sufragio cuyos votantes eran clientes antes que ciudadanos se escindió tradicionalmente en dos bandos. Los conservadores estaban comprometidos primordialmente con el orden y, al igual que sus homólogos europeos, con la religión, en una estrecha alianza con la Iglesia Católica. Los liberales, se declaraban a favor del progreso y eran, por regla general, anticlericales. Económicamente hablando, la riqueza aposentada en la tierra tendía a ser más conservadora y las fortunas comerciales más liberales. Esta división civil estaría intermitentemente salpicada o atravesada por *pronunciamientos* y tomas del poder a manos de caciques militares enfrentados, en nombre, aunque no siempre con el consentimiento, de uno u otro de los partidos políticos que se disputaban el gobierno.

Sin embargo, a principios del siglo XX, en otros lugares este modelo había comenzado a dejar paso a una política urbana moderna, donde las coaliciones radicales o los partidos populistas movilizaban a las masas recién concienciadas con reivindicaciones que demandaban transformaciones sociales básicas. En todo el resto del continente, la acelerada urbanización y las presiones para llevar a cabo reformas agrarias provocó el declive del peso político del segmento de la clase dirigente cuya riqueza se basaba en la tierra. Colombia es el único país donde una diarquía conservadora-liberal ha sobrevivido prácticamente durante cien años, permaneciendo aparentemente intacta hasta la llegada del siglo XXI, y ello a pesar de las elecciones legislativas gobernadas por los principios de la representación proporcional. La singularidad de este fenómeno no se reduce a América Latina; efectivamente, ningún otro sistema de partidos en el mundo puede vanagloriarse de una continuidad comparable a la colombiana. Quizá la manera más sencilla para comprender el carácter extraordinario de la oligarquía consista en hacer una lista de los vínculos de parentesco entre sus últimos presidentes. Mariano Ospina

Rodríguez (1857-1861) fue el primer presidente autodeclarado conservador de Colombia, en época de Palmerston; su hijo, Pedro Nel Ospina, ocupó el mismo cargo en la de Baldwin (1922-1926); su nieto, Marino Ospina Pérez, en la de Attlee (1946-1950). Alfonso López Pumarejo, el presidente liberal más relevante de los últimos tiempos, fue contemporáneo de Roosevelt (1934-1938, y de nuevo en el periodo 1942-1945); su hijo, Alfonso López Michelsen, fue presidente en época de Ford (1974-1978) y de Carter. Alberto Lleras Camargo, otro liberal, fue presidente en los días de la Alianza por el Progreso (1958-1962); su primo, Carlos Lleras Restrepo, lo fue durante la guerra de Vietnam (1966-1970). Le sucedió el conservador Misael Pastrana (1970-1974); veinte años después, su hijo, Andrés Pastrana, tomaba las riendas del poder (1998-2002). Si se incluyera a los candidatos presidenciales, al igual que a los ganadores, la lista sería todavía más larga: Álvaro Gómez Hurtado, el abanderado del partido conservador en 1974 y 1986, era hijo de Laureano Gómez (1950-1953), el presidente más extremista del Partido Conservador. ¿Cómo pudo esta oligarquía desafiar durante tanto tiempo, excluyendo a todas las clases antagonistas, una deriva hacia la extinción? ¿Qué relación guarda con la imposibilidad para erradicar a las relativamente pequeñas fuerzas guerrilleras y con la consolidación de los paramilitares asesinos? No se han aportado respuestas concluyentes a estas preguntas pero, necesariamente, en ellas descansa una clave de la agonía contemporánea de Colombia.

La oligarquía

Originalmente, la división entre liberales y conservadores tenía una fundación ideológica racional en la sociedad colombiana. Los liberales eran miembros, por lo común laicos y pertenecientes a la elite terrateniente y comercial, hostiles hacia lo que consideraban los compromisos clericales y militaristas del último periodo de la carrera de Bolívar como Libertador. Los conservadores, quienes en un principio estaban íntimamente relacionados con la aristocracia o burocracia colonial, representaban al orden centralizado y a los imperativos sociales de la religión. Las ideas eran relevantes en las disputas entre ambos, que empezaron con la directiva del gobierno de Santander en virtud de la cual los tratados de Bentham en materia de legislación civil y penal eran de estudio obligado en la Universidad de Bogotá ya en 1825, algo inconcebible en la propia Inglaterra incluso cincuenta años más tarde. La feroz reacción clerical condujo finalmente a la reintroducción de los jesuitas, quienes habían sido expulsados de las colonias por la monarquía española en 1767, para dirigir las escuelas de secundaria; y, posteriormente, a su reexpulsión en 1850⁴.

⁴ Frank SAFFORD y Marco PALACIOS, *Colombia. Fragmented Land, Divided Society*, Nueva York y Oxford, 2002, pp. 115, 126, 142, 151 y 204.

Pero la confrontación no se daba sólo sobre cuestiones educativas; ni tampoco sobre asuntos puramente internos de las elites. La Revolución Liberal de 1849-1953 conoció las revueltas campesinas contra los *hacendados* conservadores en el valle del Cauca y la movilización de los artesanos cizañeados por las barricadas parisinas de 1848 y los escritos de Proudhon y de Louis Blanc⁵. Al igual que en Europa, los liberales abandonaron a sus seguidores artesanos a los rigores del libre mercado y fraccionaron las tierras poseídas por los indígenas bajo un régimen comunal. Pero siguieron comprometidos, de acuerdo con su propia interpretación, con las reformas radicales. La esclavitud y la pena de muerte fueron abolidas; la Iglesia y el Estado, separados; los diezmos obtenidos por el clero, levantados; el divorcio, legalizado; el ejército, reducido y, además, se introdujo el sufragio masculino universal; incluso, hubo una provincia que por un breve y onírico instante concedió a las mujeres, por primera vez en la historia mundial, el derecho a votar.

Fue este aluvión de medidas lo que hizo madurar un conservadurismo más explícito e intransigente, determinado a dar marcha atrás a tantos de aquellos cambios como pudiera. La confiscación de las tierras de la Iglesia por Mosquera y el tránsito a una constitución descentralizada condujo a la sañuda reacción conservadora conocida como la Regeneración, que tuvo lugar bajo el mandato de Rafael Núñez y que marcó el comienzo, en 1880, de cinco décadas extremadamente reaccionarias. La Constitución de 1886 consagró el poder del centro, otorgando al presidente la autoridad para nombrar a los gobernadores provinciales. El nuevo concordato con el Vaticano afianzó una firme conexión con las tendencias más autoritarias de la Iglesia, lo que estimuló las sucesivas olas de encallecidas batallas entre fanáticos suscitadas en otros escenarios del enfrentamiento —europeos o latinoamericanos—, para robustecer la fe en Colombia. A finales del siglo, los regímenes regeneracionistas aplastaron a la resistencia liberal en la cruenta Guerra de los Mil Días (1899-1903) causando 100.000 muertes y dejando a Panamá en manos de Estados Unidos.

Topografía del clientelismo

¿Por qué es tan importante todavía esta prehistoria de la Colombia del siglo xx? La razón descansa en que la misma registra los parámetros de la política nacional hasta los primeros días de la década de 1960 y,

⁵ Para un estudio pionero del desarrollo del afroliberalismo y del conservadurismo indígena y de los colonos antioqueños en el Cauca después de 1848, véase James SANDERS, *Contentious Republicans: Popular Politics, Race and Class in Nineteenth-Century Colombia*, Durham, Carolina del Norte, de próxima aparición. El innovador libro de Nancy APPLEBAUM, *Race, Region, and Local History in Colombia, 1846-1948*, Durham, Carolina del Norte, 2003, va más allá de los debates economicistas sobre los colonos antioqueños para examinar el papel desempeñado por la supremacía blanca en la formación cultural de una identidad *paisa* colonizadora a lo largo del *eje cafetero*.

mediante la perpetuación de las identidades liberal y conservadora, todavía hoy congela la vida pública en un rigor mortis característico. Sin duda, las razones de tal persistencia están muy relacionadas con la topografía: la extrema diferenciación geográfica siempre ha sido un factor ineludible en la política colombiana. El país está cortado por dos cadenas montañosas que se elevan desde el sur y que a su vez se encuentran divididas por los cauces del Cauca y del Magdalena. Hacia el sures-te, se abre en una vasta extensión de tierras bajas tropicales que se extienden a ambos lados de la línea del ecuador y se hallan cruzadas por innumerables ríos que desembocan en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Hacia el norte y hacia el oeste se encuentran las costas del Caribe y del Pacífico y la impenetrable selva del istmo panameño, mientras que las principales reservas de petróleo del país yacen en la provincia oriental de Arauca, dándose de frente con la frontera de Venezuela. La mayoría de la población siempre ha estado concentrada en las regiones montañosas subtropicales más frías; Bogotá se encuentra a 2.639 metros por encima del nivel del mar y tiene una temperatura media de 14° C. Pero las propias ciudades estuvieron separadas durante siglos por tortuosas carreteras y por cimas cubiertas de nieve; como hoy en día lo siguen estando para aquellos que no se pueden permitir viajar en avión.

Esta configuración ha otorgado a las elites tradicionales una ventaja logística excepcional a la hora de imponer celosos controles clientelistas desde arriba y, al mismo tiempo, de bloquear movilizaciones a escala nacional desde abajo. Sin embargo, el transporte deficiente y el aislamiento geográfico también han tenido un efecto condicionante crítico sobre los propios grupos gobernantes. El control militar centralizado era, intrínsecamente, más difícil de establecer en Colombia que en sus países vecinos: en proporción al volumen de población, el tamaño del ejército siempre fue aproximadamente tres veces menor que el de Perú o el de Ecuador⁶. De este modo, los partidos civiles —y la Iglesia— se hicieron mucho más importantes como mecanismo de transmisión del poder que en otros lugares. Pero tampoco ellos podían escapar a la lógica de la fragmentación territorial.

Aunque el país se encontraba dividido entre dos grandes lealtades políticas, éstas no mostraban un patrón regional sistemático. Algunas zonas dieron muestras, en épocas anteriores, de una nítida predominancia de uno u otro partido: el litoral caribeño era liberal, Antioquia era conservadora. Pero eran excepciones. La regla estaba marcada por un entramado mucho más enmarañado de rivalidades locales urdidas en el micronivel de las pequeñas comunidades o municipios, que se concentraba en cada región. Esto tuvo dos consecuencias. Liberales y conservadores estuvieron desde el principio, y así han permanecido, sumamente divididos en

⁶ James PAYNE, *Patterns of Conflict in Colombia*, New Haven, 1968, pp. 121-122.

facciones dentro de sus respectivas organizaciones de ámbito nacional. Pero lo que perdían en cohesión horizontal lo ganaban en control sobre sus partidarios, en la medida en que las intensas fuerzas materiales e ideológicas de su rivalidad mutua eran aplicadas en los escenarios de sus bases populares; no cabe duda de que la intensidad excepcional del clientelismo colombiano debe mucho a la localización específica de estas presiones.

Hay otra característica del ámbito rural colombiano que refuerza este clientelismo a la vez que le confiere un inusitado sesgo político. A partir de las guerras de independencia, Colombia emergió como uno de los países más disgregados y económicamente deprimidos de las nuevas naciones latinoamericanas, con un sistema de comunicaciones miserable, un escaso mercado exterior y una exigua capacidad fiscal. Desde la década de 1870, el descubrimiento de que extensas porciones de tierras en las alturas eran un terreno ideal para el cultivo del café le proporcionó un importante producto básico para la exportación, generando sustanciales beneficios y transformando las perspectivas de crecimiento económico. Comenzando en Santander, como una extensión de las plantaciones de café venezolanas, el cultivo se extendió hacia el oeste en Cundinamarca para llegar a Tolima y Antioquia al final de siglo. En el periodo de dos décadas, el país se había convertido en el segundo productor mundial después de Brasil.

Pero el modelo de su economía cafetera tenía rasgos distintivos. En Brasil, o Guatemala a este respecto, predominaban las grandes plantaciones trabajadas bien por campesinos endeudados, bien por braceros asalariados. En Colombia, estas haciendas eran más modestas y tenían menos importancia en el sistema de cultivo, mientras que eran mucho más numerosas las pequeñas propiedades, aunque no hasta el extremo de Costa Rica. Comparada con las grandes *fazendas* de Sao Paulo o Paraná, la base social de la agricultura cafetera en Antioquia o Santander, si bien considerablemente desigual, era, medida en términos de propiedad de la tierra, más «democrática». Con importantes excepciones regionales, tales como Cundinamarca y Tolima, la producción estaba controlada no por hacendados enfrentados a una continua escasez de mano de obra, sino por familias campesinas trabajando en terrenos de pequeño o mediano tamaño situados a altitudes intermedias, de entre los 1.000 y los 2.000 metros. Sin embargo, la comercialización del cultivo siempre estuvo en manos de una elite acaudalada, que podía adelantar el crédito a los pequeños agricultores, comprar su producción y financiar su exportación.

De este modo, los pequeños productores a menudo se veían empujados a enfrentarse con los acreedores-comerciantes y con los especuladores de los bienes raíces sobre los títulos de la tierra y las condiciones de venta de su cosecha. Los márgenes de beneficio dependían del mantenimiento

de un monopolio oligárquico tanto en el mercado como en el sistema político de partidos⁷. Incluso, en las haciendas de gran tamaño de Cundinamarca, los comerciantes-propietarios de la tierra tuvieron que enfrentarse con arrendatarios díscolos que se apropiaban de lo que no les pertenecía, se dedicaban al contrabando, ocupaban propiedades, comerciaban con bebidas alcohólicas destiladas ilegalmente y organizaban revueltas ante las subidas de los impuestos⁸. Pero la interconexión habitual entre los pequeños propietarios situados por debajo y los poderosos distribuidores colocados por encima, que caracterizaba la estructura del sector cafetero en Colombia, tendía a reproducir los vínculos tradicionales de dependencia adoptando formas modernizadas que reforzaban los lazos clientelistas.

El siglo xx

La más rica de todas las regiones dedicadas al cultivo del café era Antioquia, famosa por sus compromisos ultramontanos. El prolongado dominio de los conservadores, en un periodo en el que prácticamente en todos los demás rincones de América Latina eran rechazados o eclipsados, tenía una base económica en el crecimiento espectacular de la exportación de café, que catapultó a los industriales dedicados al comercio de Medellín, la ciudad más reaccionaria y católica de Colombia, a una posición de predominio nacional. De este modo, el país se introdujo en la economía mundial bajo el liderazgo de los segmentos más regresivos de su elite, en una época en la que por todas partes los liberales defensores del libre mercado, afanados en secularizar la vida civil, habían comenzado a dominar de manera sistemática. Precisamente cuando el movimiento obrero organizado comenzaba a hacerse sentir en la mayor parte del resto del continente, el gobierno conservador recobraba su vigor gracias al *boom* del café. La producción se disparó desde 1 millón de sacos en 1913 a 2 millones en 1921 y 3 millones en 1930. Durante el mismo periodo, Wall Street abrió generosas líneas de crédito en lo que se llegó a conocer entre los colombianos como el «baile de los millones», aliviando a la elite pero sin conceder un respiro a los beligerantes

⁷ Mariano ARANGO, *Los funerales de Antioquia la grande*, Medellín, 1990, y *Café e industria 1850-1930*, Bogotá, 1977; Michael F. JIMÉNEZ, «Traveling Far in Grandfather's Car: The Life Cycle of Central Colombian Coffee Estates: The Case of Viotá, 1990-30», *Hispanic American Historical Review* 69, 2 (1989), pp. 185-219; «At the Banquet of Civilization: The Limits of Planter Hegemony in Early-Twentieth-Century Colombia», en William ROSEBERRY *et al.* (eds.), *Coffee, Society, and Power in Latin America*, Baltimore, 1995, pp. 262-293, y *Struggles on an Interior Shore*, Durham, Carolina del Norte, de próxima aparición. Siguiendo el trabajo de Catherine LEGRAND, *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia 1850-1936*, Albuquerque, Nuevo México, p. 207, el término «campesino» se utiliza para referirse a «pequeños cultivadores rurales que dependen del trabajo familiar para producir lo que consumen. Los aparceros, los arrendadores de servicios, los pequeños propietarios y los colonos de las fronteras, según esta definición, se denominarían campesinos».

⁸ M. F. Jiménez, *Struggles on an Interior Shore*, cit.

granjeros de las colinas, a los arrendatarios o a los aparceros⁹. Sin embargo, por aquel tiempo comenzaban a aparecer los primeros signos de un nuevo radicalismo popular.

En 1914, un aparcerero llamado Quintín Lame fue nombrado el máximo líder de las tribus indígenas de Colombia (aunque no hablaba *nasa*, la lengua de su pueblo). Lame había combatido en el bando liberal en la Guerra de los Mil Días. Debido a sus esfuerzos organizativos, pasaría la década siguiente entrando y saliendo de la cárcel; pero el movimiento que dirigía, conocido como la Quintinada, ganó terreno mediante la táctica de la ocupación colectiva de tierras, que se extendió por todo el sur de Colombia desde el Cauca a Tolima. A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, los campesinos emprendieron una ofensiva a lo largo de la frontera del café. El clima político de aquel momento era marcadamente diferente, en la medida en que las ideas anarcosindicalistas y socialistas habían comenzado finalmente a propagarse dentro del movimiento obrero después de la revolución rusa y mexicana y de la Primera Guerra Mundial. En 1926, la primera organización política independiente de la tutela del Partido Conservador y del Partido Liberal, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), comenzó a organizar la lucha proletaria en los enclaves dedicados a la exportación en el Caribe y a lo largo de las fronteras del café. El segundo vicepresidente del PSR, Raúl Eduardo Mahecha –un sastre que, al igual que Quintín Lame, era un veterano del bando liberal de la Guerra de los Mil Días–, contribuyó a fundar el sindicato de los trabajadores del petróleo, USO, y en 1926 encabezó una huelga contra Tropical Oil (una filial de Jersey Standard) en el Magdalena Medio. La primera vicepresidenta del partido, María Cano, hija de una familia oligarca de Medellín perteneciente al mundo del periodismo, realizó una gira de dos años por el país entre 1925 y 1927. Junto con Mahecha, lideró una potente huelga de los trabajadores bananeros secundada por 4.000 hombres contra United Fruit cerca de Santa Marta mantenida entre noviembre y diciembre de 1928. En 1929, los «Bolcheviques del Líbano» del PSR se alzaron en una insurrección fallida en el sur de Tolima en lo que fue la primera revuelta explícitamente socialista en Colombia y que representaba la alianza que los artesanos y los intelectuales provinciales radicales habían forjado con los arrendatarios, los aparceros y los pequeños propietarios de tierras.

En la versión de la huelga de los bananeros de 1928 inmortalizada por Gabriel García Márquez en *Cien años de soledad*, miles de ellos eran masacrados y cargados en vagones de tren, para que luego la memoria

⁹ Malcolm DEAS, «The Fiscal Problems of Nineteenth-Century Colombia», *Journal of Latin American Studies* 14, 2 (1982), pp. 287-328; Vernon LEE FLUHARTY, *Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia*, Pittsburgh, 1957.

de la represión fuera erradicada mediante la amnesia oficial¹⁰. En realidad, los hechos fueron minuciosamente investigados y sacados a la luz por un joven abogado formado en la criminología positivista italiana. Como diputado en la Cámara Baja del Congreso, Jorge Eliécer Gaitán utilizó la masacre para lanzar su carrera como el primer político populista dentro del Partido Liberal¹¹. En su estudio sobre Gaitán, Herbert Braun le etiqueta, acertadamente, como un reformista pequeño burgés; pero al dar voz oficial a las demandas populares y situar la «cuestión social» en el centro del debate parlamentario nacional, se granjeó la enemistad de la fracción oligarca dominante en el seno de su propio partido, así como la de la derecha más conservadora¹². Gaitán rompió con los liberales en 1933 para fundar la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, UNIR, y aprobó la fundación de ligas de campesinos para competir con las patrocinadas por el Partido Liberal y, de modo crucial, con las del Partido Socialista Democrático, el partido comunista local¹³.

El PSD había sido fundado en 1930 por líderes del PSR, dos de los cuales, José Gonzalo Sánchez y Dimas Luna, habían dirigido la Quintinada en los primeros años de la década de 1920. Con una fuerte influencia indígena, el PSD dio máxima prioridad a las luchas campesinas en las fronteras del café, especialmente en Tolima y en Cundinamarca, donde las mayores plantaciones eran propiedad de banqueros-comerciantes de Bogotá, así como de alemanes y estadounidenses. El PSD creó ligas de campesinos para capitalizar la oleada de ocupaciones de tierras que sacudió a todo el país desde 1928, y a principios de la década de 1930 había ganado una considerable legitimidad política forjando un «agrarismo revolucionario cuyo principal interés era la formación y la protección de las comunidades autónomas de pequeños propietarios»¹⁴. Gaitán acusó al PSD de saltarse las etapas del desarrollo histórico: mientras que las ligas campesinas comunistas aspiraban a marcar el inicio de la revolución

¹⁰ Eduardo POSADA CARBÓ, «Fiction as History: The Bananeras and Gabriel García Marquez's *One Hundred Years of Solitude*», *Journal of Latin American Studies* 30, 2 (1998), pp. 395-414. Marco Palacios señala la falta de consenso acerca del número exacto de personas masacradas: el cónsul estadounidense fijaba la cifra en 1.000, el líder de la huelga, Alberto Castrillón, en 1.500 y el general al cargo de la matanza en 47; véase *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, 1995, p. 120. David Bushnell, citando a Roberto Herrera Soto y a Rafael Romero Castañeda, considera como «definitivo» un número entre los 60 y los 75: *The Making of Modern Colombia: a Nation in Spite of Itself*, Berkeley, 1993, p. 180.

¹¹ Véase W. John GREEN, *Gaitanismo, Left Liberalism and Popular Mobilization in Colombia*, Gainesville, Florida, 2003.

¹² Herbert BRAUN, *The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia*, Madison, 1986, pp. 8-9, 45-46 y 54-55. Braun sostiene que el gaitanismo tuvo poco impacto en la clase obrera organizada, pero Green ha demostrado que no fue así.

¹³ Gonzalo SÁNCHEZ, «Las Ligas Campesinas en Colombia», en *Ensayos de historia social y política del siglo XX*, pp. 152-168.

¹⁴ Marc CHERNICK y Michael JIMÉNEZ, «Popular Liberalism, Radical Democracy, and Marxism: Leftist Politics in Contemporary Colombia 1974-1991», en Barry CARR y Steven ELLNER (eds.), *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, Boulder, 1993, p. 66.

socialista, el UNIR había proyectado eliminar los obstáculos feudales que impedían el desarrollo de la agricultura capitalista. En los primeros años de la década de 1930, el campo era un disputado terreno político en ebullición y el PSD —éste era el tercer periodo sectario de la Comintern— consideraba que UNIR era su principal opositor político, especialmente en Tolima y en Cundinamarca.

¿Un nuevo pacto?

Entretanto, se había producido un viraje decisivo dentro la política de la elite. En 1929, los precios del café sufrieron un fuerte descenso desde 60 a 34 céntimos el kilo amenazando con un desastre para la economía basada en la exportación, que se confirmó con el hundimiento de Wall Street en octubre. Simultáneamente, los conservadores sufrieron una escisión provocada por el hecho de que los líderes de la Iglesia dieran abiertamente su apoyo a los candidatos de la oposición en las elecciones de 1930. Con los cimientos económicos de su hegemonía resquebrajados y su cohesión política hecha añicos, se dejaba la puerta abierta a los liberales para que recuperaran la presidencia después de cincuenta años en barbecho. Su candidato, Olaya Herrera, había sido embajador en Washington bajo el gobierno de los conservadores, con quienes mantenía buenas relaciones, y sus votos no superaron la suma de los obtenidos por el conjunto de los rivales conservadores. No hubo cambios brillantes en la política del gobierno. Como sí que los hubo cuatro años más tarde, cuando los liberales volvieron a ganar —sin oposición, ya que los conservadores boicotearon las elecciones— siendo su líder el descendiente de una acaudalada familia de banqueros, Alfonso López Pumarejo, a quien sus admiradores bautizaron con el apelativo del Roosevelt de Los Andes.

La «Revolución en Marcha» proclamada por López no pasó de ser un capítulo entre otros, más radical en su retórica que en sus reformas¹⁵. Pero las cargas impositivas aumentaron, se destinó una mayor parte del presupuesto a escuelas y carreteras y se liberalizó la legislación en materia laboral, lo cual dio paso a un crecimiento de la sindicalización. El esfuerzo más importante se dedicó a revisar la Constitución de 1886 para consolidar la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto bastó para atraer de nuevo a Gaitán al redil liberal en 1935 y hacer que el PSD, en sintonía con las políticas del Frente Popular, volcara toda su fuerza en apoyar el régimen de López, desmovilizara a sus ligas campesinas y renunciara a sus ambiciones vanguardistas. Con el apoyo del PSD, que era la fuerza dominante en los sindicatos, López creó, en 1936, la Confederación Central de Trabajadores (CTC), con el objetivo de convertir al movimiento

¹⁵ Para una saludable perspectiva escéptica de estos acontecimientos, véase Richard STOLLER, «Alfonso López Pumarejo and Liberal Radicalism in 1930s Colombia», *Journal of Latin American Studies*, 27 (1995), pp. 367-397.

obrero organizado en un bloque clientelista bajo el control del partido liberal.

Tras dos años en el cargo, López ordenó detener cualquier reforma subsiguiente. La medida más relevante introducida por él fue la Ley 200, aprobada en 1936, en virtud de la cual la ocupación efectiva de la tierra se instituyó como una base legal para la posesión de la misma. Se ha sostenido que esta victoria parcial de los trabajadores del café –notablemente parcial, ya que el beneficio obtenido por los terratenientes fue mucho mayor que el obtenido por aquéllos–, asegurando el acceso a las tierras fronterizas en la década de 1930, irónicamente, condujo al aislamiento de los sindicatos más combativos en otros sectores, como el del petróleo y el del transporte, que por mucha fuerza que tuvieran eran incapaces de incidir en este ámbito central de la economía. Lo que explica la fragmentación subsiguiente del movimiento obrero en su conjunto y, en consecuencia, el reforzamiento de los dos partidos tradicionales. Mientras que en otras partes de América Latina un campesinado movilizado jugaría un papel central en las alianzas radicales de clase, desde el momento en el que los cultivadores de café colombianos tuvieron sus parcelas familiares –según prosigue esta hipótesis–, la solidaridad de los trabajadores desapareció y la competencia dentro de la propia clase para evitar la proletarización, mediatizada por las prácticas clientelistas de los dos partidos, cobró un carácter sangriento¹⁶. Si bien esta visión debe ser matizada –algunos arrendatarios y aparceros gaitanistas y del PSD de Viotá (Cundinamarca) y de Barrancabermeja (Santander) fueron el rizoma de las posteriores FARC y del ELN–, la *violencia* de las décadas posteriores a la guerra no puede comprenderse si no se reconoce la integración, bajo un régimen de dependencia, de la mayoría de los cultivadores de café en el aparato clientelista de cada partido.

La «República Liberal» duró hasta 1946. Durante la corrupta segunda administración de López de 1942 y 1945, aquellas reformas –como la seguridad social y la jornada de ocho horas– que no habían sido letra muerta para el movimiento de trabajadores organizado fueron revocadas, y el ya limitado programa agrario, derogado mediante la Ley 100. A principios de la década de 1940, se había alcanzado un consenso entre la elite colombiana, que consideraba que era el momento para una vuelta a la ortodo-

¹⁶ Ésta es la tesis fundamental de Charles BERGQUIST, «The Labor Movement (1930-46) and the Violence», en Ch. BERGQUIST *et al.* (eds.), *The Violence in Colombia: the Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Wilmington, 1992, pp. 69 y 195. Si bien la «Revolución en Marcha» fue, ciertamente, burguesa, en ningún caso fue democrática, ya que privilegió a los propietarios de la tierra frente a los ocupantes, arrendatarios, aparceros y minifundistas. Aunque el último grupo intentó utilizar la ley a su favor, los propietarios tenían ventaja y pudieron expandir sus propiedades mediante una combinación de violencia privada y pública. Para un análisis del café y el minifundismo, que cuestiona el determinismo estructural de Bergquist, véase W. John GREEN, «Sibling Rivalry on the Left and Labour Struggles in Colombia during the 1940s», *Latin American Research Review* 35, 1 (2000); y Michael JIMÉNEZ, «The Many Deaths of the Colombian Revolution», *Columbia Papers on Latin America*, 13 (1990).

xia económica liberal. El bienestar social y las políticas para favorecer el empleo no ocuparían ningún lugar en el nuevo orden. Medellín, donde la Unión de Trabajadores de Colombia había sido creada por la Iglesia en 1946, iba a ser un modelo de ciudad para el resto de la nación. En 1944, la elite industrial conservadora de la localidad constituyó la ANDI, la organización nacional de los industriales, y en 1945 los comerciantes del café fundaron FEDECAFE. Durante la década posterior, si bien ambas organizaciones, emparentadas por vínculos matrimoniales, tuvieron sus diferencias, en adelante serían las encargadas de dictar, a espaldas del dominio público, la política económica a los sucesivos gobiernos¹⁷.

Entre 1945 y 1950, las manifestaciones en Bogotá y en Cali fueron aplastadas, las huelgas proscritas, los fusilamientos autorizados, el estatuto legal de la CTC cuestionado y el PSD ilegalizado. En 1945, Alberto Lleras Camargo, quien había tomado posesión del cargo al ser abandonado por López Pumarejo antes de acabar su periodo de mandato, aplastó la huelga de trabajadores fluviales dirigida por comunistas, a pesar de que FEDENAL, su sindicato, había sido el más exitoso y militante de la CTC. En 1946, a través de la UTC, la sindicalización en los sindicatos de empresa –apadrinada por la patronal, la Iglesia y los propios sindicatos patrocinados por Washington en el marco de la Guerra Fría– comenzó a crecer vertiginosamente. La década de 1940 vivió un breve periodo de apertura democrática en prácticamente toda América Latina con la llegada al poder de los populistas. En Colombia, se asistió a un virulento asalto contra el movimiento obrero organizado.

La violencia

Únicamente Gaitán –el destacado abogado laboralista del momento, que había ocupado el cargo de senador, de concejal, de alcalde de Bogotá, de ministro de Educación y de Trabajo– mostró su disconformidad con estos desarrollos por medio de los canales oficiales, obteniendo un gran respaldo entre el electorado liberal. Aunque los líderes del PSD le detestaban, Gaitán tuvo también el apoyo de muchos de sus militantes y el sólido respaldo de la clase obrera, incluso en los focos conservadores católicos como Medellín. Cuando los grupos de poder de la órbita liberal le bloquearon las posibilidades de convertirse en candidato del partido para la presidencia en 1946, optó por presentarse blandiendo su propio programa electoral. El resultado fue dividir el voto liberal justo por la mitad y ceder el paso al candidato conservador, Ospina Pérez. Dos años más tarde, el 9 de abril de 1948, en medio de una escalada de violencia en las áreas rurales y de una intensificación de la represión del movimiento obrero organizado en las ciudades, Gaitán fue asesinado a plena luz del día en una calle de Bogotá. La noticia de su asesinato desencadenó las

¹⁷ Véase Medófilo MEDINA, «Violence and Economic Development: 1945-50 and 1985-88», en Ch. BERGQUIST *et al.*, *Violence in Colombia: Historical Perspective*, cit., pp. 157-158; Daniel PÉCAUT, *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, 2000, pp. 58-59; y Eduardo SÁENZ ROVNER, *La ofensiva empresarial: industriales, políticos, y violencia en los años 40 en Colombia*, Bogotá, 1992.

mayores revueltas urbanas de la historia colombiana del siglo xx, bautizadas como el *Bogotazo*, un vendaval que azotó tanto a las provincias como a la capital.

Con frecuencia se dice que el periodo conocido por el simple, aunque engañoso, nombre de *la violencia* dio comienzo con este episodio dramático. Sin embargo, esta perspectiva difumina casi dos décadas. Para comprender sus raíces, es necesario volver a los orígenes de la República Liberal. Cuando el gobierno conservador llegó a su punto final en 1930, las tensiones que desde hacía tiempo se habían ido cociendo en el medio rural entraron en ebullición. La memoria de los partisanos masacrados en la Guerra de los Mil Días, cuando los notables liberales y conservadores movilizaron milicias de campesinos para asesinarsé mutuamente en un enfrentamiento que costó la vida a uno de cada veinticinco colombianos, aún pervivía en muchas localidades. Nada más ocupar su cargo Olaya Herrera, el miedo a que ahora los liberales pudieran vengarse sirvió de detonante para los primeros estallidos de violencia por parte de los minifundistas conservadores y de los terratenientes en el norte de Santander y Boyacá¹⁸. Estos miedos tampoco eran completamente irracionales. Desde el momento en el que los liberales se atrincheraron en el poder, recurrieron constantemente al fraude y a la intimidación. Como venganza, los conservadores boicotearon todas las elecciones celebradas hasta 1946. Durante todo el periodo que comprendió la República Liberal, siempre hubo un trasfondo amenazante de asesinatos cometiéndose en los municipios: la polarización política y la violencia paramilitar se fueron progresivamente extendiendo durante las décadas de 1930 y 1940.

Pero si la lógica del «rencor defensivo» que imperaba entre las comunidades locales enfrentadas, cada una de ellas con su recuerdo o su miedo a sufrir heridas considerables, estuvo presente desde el principio, hubo dos acontecimientos nacionales que sobredeterminaron esta dinámica subyacente¹⁹. El primero consistió en un deslizamiento en el equilibrio electoral entre los dos partidos incluso cuando ya se había alcanzado cierto nivel de urbanización, que en Colombia aún continuaba siendo bastante modesta. La solidez de las lealtades conservadoras siempre había dependido de la influencia del clero, la cual tenía mucha más fuerza en las ciudades pequeñas y en las áreas rurales. Desde el momento en el que la proporción de habitantes en las ciudades sobrepasó cierto límite, los liberales comenzaron a contar permanentemente con una mayoría sociológi-

¹⁸ Para un apasionante relato de estos acontecimientos y sus antecedentes, véase James HENDERSON, *Modernization in Colombia. The Laureano Gómez Years, 1889-1965*, Gainesville, Florida, 2001, pp. 183-189. Ésta es, hoy en día, la mejor narración histórica de este periodo en lengua inglesa. Su título de cabecera –tal vez impuesto por el editor– a duras penas podría ser menos apropiado: el auténtico tema del libro descansa en su subtítulo, aunque al mismo tiempo sea algo menos, y considerablemente más, que una autobiografía.

¹⁹ La noción de rencor defensivo fue desarrollada en el clásico estudio de J. Payne, *Patterns of Conflict in Colombia*, cit., pp. 161-167.

ca. Esto quedó completamente claro en 1946, precisamente en unas elecciones que perdieron, cuando los dos candidatos liberales sumaron cerca del 60 por 100 de los votos, una proporción que ha sido la regla del partido desde entonces.

Por el lado conservador, la pérdida del poder hizo crecer la influencia del ala más extrema del partido, bajo el liderazgo del carismático Laureano Gómez. Apodado el «Hitler criollo» por sus enemigos, en aquella época Gómez fue considerado, y así lo ha sido desde entonces, un fascista demagogo que condujo a su partido a extremos fanáticos y empujó al país a la guerra civil. Efectivamente, dentro del endogámico mundo de la elite política colombiana, había sido un buen amigo tanto de López Pumarejo como de su sucesor, Eduardo Santos, y se benefició de los anteriores contactos con el mundo financiero. A mediados de la década de 1930, había escrito ácidas críticas tanto contra Musolini —el Duce le desagradaba especialmente— como contra Hitler. Pero él era un integrista católico. Durante las décadas de 1930 y 1940 América Latina estaba repleta de movimientos y de líderes, no todos ellos reaccionarios, impresionados por el éxito del fascismo alemán o italiano: Toro y Busch en Bolivia, Vargas en Brasil, Perón en Argentina. Lo que diferenciaba a Colombia era que esa misma atracción ligaba a Gómez y a su partido con Franco, considerado una versión tradicionalista y religiosa de la contrarrevolución, libre de todas las connotaciones populistas que hacían que los regímenes italiano o alemán parecieran atrayentes en otras partes. El resultado fue una radicalización retórica —equiparable a los niveles alcanzados en la Guerra Civil española— de enemistades históricas hacia el liberalismo, ahora representado como virtualmente indistinguible del comunismo.

Éste era el escenario inflamable en el que Gaitán fue asesinado. El populismo que él había bosquejado en el ala izquierda del liberalismo se estaba convirtiendo en una amenaza para la oligarquía del país, a la que Gaitán llamaba por este nombre. Pero un análisis comparativo revela que todavía era relativamente débil. La dispersión de la población concentrada en las grandes ciudades en al menos cuatro centros regionales, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ninguno de los cuales contaba con más de medio millón de habitantes en 1940, privaba a un potencial populismo colombiano de una masa crítica. El propio Gaitán señaló en 1943 que la fuerza de trabajo sindicada del país no alcanzaba el 5 por 100. Éste es el motivo por el que a pesar de que el *Bogotazo* fue una expresión de la ira popular, no condujo a ninguna toma de poder. En lugar de dirigirse contra un palacio presidencial débilmente protegido y de derrocar a Ospina, las imponentes muchedumbres fueron distraídas hacia el saqueo y los incendios, algo en lo que todas las clases finalmente coincidieron, permitiendo una dócil restauración del orden en la capital. Pero lo que podía considerarse, a grandes rasgos, como una confusa variante urbana del «rencor defensivo» reavivó inexorablemente la vigencia de este patrón, que ahora se había hecho endémico, en las zonas rurales en las que los

notables liberales, ante el temor a la venganza conservadora por el levantamiento –que se materializó en una salvaje oleada de asesinatos y de persecuciones locales–, movilizaron a sus seguidores campesinos a la resistencia, esperando lograr un resultado distinto del cosechado en la Guerra de los Mil Días. La sangre corrió igual que cincuenta años antes, pero esta vez durante mucho más tiempo²⁰.

En el momento en el que *la violencia* se dio oficialmente por concluida habían sido asesinadas más de 200.000 personas, la mayoría de ellas campesinos analfabetos. Las hebras del conflicto social nunca dejaron de estar presentes, en la medida en que los arrendatarios, los apareceros y los ocupantes de tierras en las fronteras del café participaron desde ambos lados en oleadas sucesivas de enfrentamientos. Pero, en conjunto, *la violencia* supuso una severa regresión histórica, en la que las arcaicas hostilidades partisanas ahogaron no sólo el breve legado populista de Gaitán, sino también la oportunidad de cualquier política de clase más allá de aquél. Los estragos causados fueron tanto más vanos por cuanto que en 1948 había quedado poco desacuerdo sustantivo entre los liberales, quienes habían aparcado tiempo atrás la idea de una reforma social, y los conservadores, que no defendían el mercado libre. Las dos elites estaban unidas por una devoción común hacia el capitalismo de la Guerra Fría y hacia el anticomunismo que volvía cada vez más irrelevante, incluso, a la rama clerical fervorosa de Gómez. Entretanto, a la vez que las ciudades se abarrotaban de familias desplazadas que huían de la carnicería que se estaba produciendo en las laderas, a partir de mediados de la década de 1940 se asistió a un decenio de prosperidad urbana sin precedentes. Misteriosamente, en 1948 la producción agrícola experimentó un incremento inaudito del 77 por 100 y en 1949 del 113 por 100. Los comerciantes de las provincias, los distribuidores minoristas, los gestores estatales y los agentes políticos se enriquecieron gracias al café, al ganado y a las tierras expropiadas²¹.

²⁰ El mapa de *la violencia* coincide con la de las fronteras del café, establecidas a finales del siglo XIX, y con las áreas de colonización de principios del siglo XX. Si bien entre 1945 y 1949, la violencia se concentró en Santander, Boyacá, Caldas y el valle del Cauca, desde 1949 hasta 1953 se centró en las regiones fronterizas: las llanuras orientales, el Magdalena Medio, Muzo en Boyacá y Urao en Antioquia. Posteriormente, entre 1954 y 1958, con la difusión bajo la dictadura de los pistoleros conservadores (*los pájaros*), cobró mayor intensidad en el Quindío. Desde el nacimiento del Frente Nacional y la persecución por el gobierno del bandolerismo, la violencia se concentró en Quindío y en Tolima entre 1954 y 1958; y en las repúblicas independientes situadas en Tolima y Cundinamarca, entre 1959 y 1964. De manera parecida, un análisis cartográfico de la violencia en el medio rural a partir de la década de 1980 demostraría que su difusión coincide con los territorios fronterizos donde se producen las mercancías destinadas a la exportación, esto es, la coca, el petróleo, las esmeraldas, los plátanos, la madera noble, el oro, el carbón y el aceite de palma. Véase Mary ROYDAN, *Blood and Fire: la violencia en Antioquia, Colombia, 1946-53*, Durham, Carolina del Norte, 2002. Este libro brinda el mejor enfoque general del periodo.

²¹ Carlos Miguel ORTIZ SARMIENTO, «The “Business of the Violence”: the Quindío in the 1950s and 1960s», en Ch. Bergquist *et al.*, *Violence in Colombia: Historical Perspective*, cit., pp. 125-154; véase también Jesús Antonio BEJARANO, «Democracia, conflicto y eficiencia económica», en J. A. BEJARANO (ed.), *Construir la paz*, Bogotá, 1990, pp. 143-171.

El propio Gómez, poco después de convertirse en presidente en 1950 en unas elecciones que fueron boicoteadas por los liberales, se retiró debido a su delicado estado de salud, y cuando en 1953 intentó reanudar sus tareas, fue derrocado por el único golpe militar ocurrido en Colombia en los últimos tiempos. El general Gustavo Rojas Pinilla, jefe del ejército, tomó el poder con el apoyo de las facciones opositoras a Gómez dentro del Partido Conservador, con las que guardaba estrechas relaciones familiares y personales. Una vez en el poder, intentó amoldar al movimiento obrero organizado a un bloque clientelista de lealtad exclusiva hacia él y ha sido descrito como una figura con el perfil de Perón. Pese a ello, había participado en la carnicería conservadora como comandante –incluso la embajada estadounidense expresó su rechazo ante el hecho de que éste «veía un rojo detrás de cada cafeto»– y, en el cargo de presidente, procedió a amasar una fortuna en turbios negocios con ranchos de ganado y bienes raíces²². Bajo su régimen, *la violencia* entró en una nueva fase.

Las luchas en las tierras altas

Cuando la guerra civil difusa estalló después de la muerte de Gaitán, el PSD –que ya se encontraba ilegalizado por Ospina– se centró en el trabajo clandestino en el medio rural, abogando por la autodefensa armada. En 1949, se formaron sus primeros grupos a lo largo de las líneas ferroviarias de Santander, en los enclaves petroleros en Ariari y, lo que es más importante dado el rumbo que tomaron posteriormente los acontecimientos, en Tolima y Cundinamarca, donde las ligas campesinas del PSD y de la UNIR habían acumulado su fuerza en la década de 1930. Al final de aquel año, los caciques liberales se habían acercado al partido en busca de ayuda para crear guerrillas en sus fortalezas. En 1950, ante un anticomunismo que operaba en clave genocida, los liberales de izquierda gaitanistas formaron un frente guerrillero con los combatientes del PSD de la zona sur de Tolima. Esta fuerza estaba bajo las ordenes de los hermanos Loayza, uno de cuyos parientes, Pedro Antonio Marín, alias *Manuel Marulanda* o *Tiro Fijo*, es el líder actual de las FARC²³. Sin embargo, en el momento en el que Rojas Pinilla lanzaba su propia campaña contrainsurgente, encabezada por veteranos del batallón que Gómez había enviado a luchar junto a Estados Unidos en la guerra de Corea, la alianza liberal-comunista en el sur de Tolima se había quebrado. Después de cinco años de lucha, la fuerza guerrillera liberal más formidable de las llanuras orientales, integrada por 20.000 luchadores, entregó sus armas en la primera de las muchas amnistías frustradas²⁴. Ante la intensificación de

²² Véase J. Henderson, *Modernization in Colombia*, cit., pp. 370 y 366.

²³ Medófilo MEDINA, «La resistencia campesina en el sur de Tolima», en Gonzalo SÁNCHEZ y Ricardo PEÑARANDA, (ed.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá 1986, pp. 233-265.

²⁴ Gonzalo SÁNCHEZ, «Raíces de la amnistía en Colombia o las etapas de la guerra en Colombia», en *Ensayos*, pp. 215-275; Alfredo MOLANO, *Amnistía y violencia*, Bogotá, 1978.

la presión militar a la que estaban sometidas, algunas milicias comunistas también se desmovilizaron mientras que el resto fueron expulsadas de sus baluartes. En el sur de Tolima, se desplegó una microguerra entre ambos grupos, donde los liberales, ahora correctamente reintegrados en el aparato central del partido, consiguieron expulsar a los comunistas de gran parte de la región.

En 1955, para acabar con uno de sus últimos reductos, Rojas Pinilla desencadenó la «Guerra de Villarica», cuyo objetivo era un municipio montañoso del norte de Tolima que había acogido a sindicatos campesinos y al Frente Democrático Comunista de Liberación Nacional, con un despliegue relámpago de 5.000 soldados mientras bombarderos F-47 y B-26 donados por Estados Unidos lanzaban napalm, igual que en Corea. Las fuerzas del Gobierno ocuparon la zona y se estima que 100.000 campesinos fueron desplazados. La mitad de las guerrillas comunistas huyeron a Sumapaz, al otro lado de la frontera en Cundinamarca, actualmente bajo el control de las FARC. Otra columna, con 100 hombres armados para proteger a las 200 familias que la integraban, emprendió una marcha sobre las tierras montañosas centrales hasta llegar a los valles donde se fundaron los asentamientos de El Guayabero, en la zona occidental de Meta, y El Pato, en la zona norteña de Caquetá que también se encuentra actualmente controlada por las FARC. Aquí los hombres que habían sido sindicalistas o líderes campesinos en las montañas se convirtieron en comandantes militares en las colonias de la nueva frontera²⁵.

Aun así, a pesar –y éste era parcialmente el motivo– de una represión más brutal y centralizada, la violencia en el medio rural en absoluto fue extinguida, sino que comenzó a cobrar nuevas formas: los pistoleros conservadores a sueldo, *los pájaros*, mataban a familias en el campo y los matones de la policía secreta cometían brutalidades en las ciudades. Cuando Rojas dejó clara su intención de mantenerse indefinidamente en el poder, tomando medidas enérgicas contra los opositores y simulando gestos populistas dirigidos al consumo urbano, la oligarquía, que siempre había apreciado un gobierno civil, cerró filas contra él. A principios de 1957, cuando no sólo ambos partidos políticos le querían fuera del poder, sino que también los industriales y la Iglesia, un cierre organizado por los empresarios precipitó su caída. Dos meses después, Laureano Gómez,

²⁵ Para más información sobre esta cuestión, véase Eduardo PIZARRO LEONGÓMEZ, *Las FARC: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, 1991; Alfredo MOLANO, *Selva adentro*, Bogotá 1987, pp. 36-48; y *Trochas y fusiles*, Bogotá, 1994, pp. 91-103; sobre Sumapaz, véase Jose Jairo GONZÁLEZ ARIAS y Elsy MARULANDA, *Historias de frontera: colonización y guerras en el Sumapaz*, Bogotá, 1990. Aunque aproximadamente entre el 30 y el 40 por 100 de los actuales combatientes y oficiales de las FARC son mujeres, en las décadas de 1940 y 1950 los hombres eran mayoría tanto en las ligas campesinas como en las milicias comunistas y, hoy en día, todavía controlan el Estado Mayor y los puestos de mando de mayor responsabilidad. Acerca de sus albores, véase Michael JIMÉNEZ, «Gender, Class, and the Rotos of Peasant Resistance in Central Colombia, 1990-1930», en Forrest COLBURN (ed.), *Everyday Forms of Resistance*, Nueva York, 1990, pp. 121-150.

quien había pasado su exilio en la España de Franco, y Alberto Lleras Camargo, quien había volado allí para negociar con él, firmaron el Pacto de Sitges, en virtud del cual liberales y conservadores se obligaban formalmente a crear un Frente Nacional que repartiría el poder a partes iguales entre ambos partidos mediante una ocupación alterna de la presidencia y la paridad de la representación en todos los escalafones del gobierno. Con el apoyo de los líderes empresariales, de la Iglesia y de las elites de los partidos, estaba previsto que el pacto se mantuviera hasta 1974, si bien en la práctica estuvo vigente, con algunas modificaciones mínimas, hasta 1986. La Iglesia, abandonando su afiliación exclusiva al Partido Conservador, ahora pretendía unificar a las dos formaciones²⁶.

La clausura de la política

El Frente Nacional iba a constituir el momento decisivo de la historia moderna colombiana. El bipartidismo tradicional había atrofiado y truncao la expresión de oposiciones políticas modernas, pero no podía reprimirlas totalmente. En las décadas de 1930 y 1940, el liberalismo había desarrollado una incipiente dinámica populista de izquierdas y el conservadurismo una ostentosa defensa de la propiedad privada y del altar. Cada uno de ellos se había sustraído a su modo al control de la elite, desencadenando un conflicto sectario peor que la Guerra de los Mil Días y que vino a poner en peligro la propia diarquía. El Frente Nacional restauró el bipartidismo, pero ahora apagaba cualquier tensión real entre sus integrantes. En el contexto creado por la Guerra Fría, el New Deal y la *Cruzada Nacionalista* se habían convertido en puntos de referencia igualmente anacrónicos: el anticomunismo era ahora un cemento suficientemente aglutinante para ambos. El resultado fue la clausura de la expresión política de toda demanda radical o de cualquier frustración frente al sistema, el cual se convirtió en un mero instrumento al servicio de los intereses compartidos de la elite que repartía de antemano todos los ministerios y los cargos en el gobierno entre liberales y conservadores.

De este modo, el Frente Nacional congeló una democracia exclusivista que perdura hasta el día de hoy donde ni siquiera vota la mitad de la población, ya que Colombia tiene el nivel de participación electoral más bajo del continente. Los movimientos populares radicales fueron criminalizados mediante una legislación típica de un estado de sitio que equiparó la protesta con la subversión. Las fuerzas de la oposición cuasi oficial, tales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), dirigido por Alfonso López Michelsen, y la Alianza Nacional Popular (ANAPO), lide-

²⁶ Colombia es el único lugar donde la jerarquía de la Iglesia se ha opuesto *en bloque* (sin ninguna voz disidente) a la teología de la liberación, y aquellos que decidieron seguir su camino terminaron, por lo general, muertos, en el exilio o, como los españoles Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, engrosando las escasas filas del ELN.

rada por Rojas Pinilla después de su regreso del exilio, tenían que presentar a sus candidatos incluidos en las listas liberales o en las conservadoras. Al prohibírseles participar en las elecciones, los comunistas –ahora conocidos como el PCC en lugar de como el PSD– se alinearon con el Partido Liberal, el cual vino a constituir la «columna vertebral» de la política del Frente Nacional. Si Colombia fue eximida de la experiencia de las dictaduras militares que dirigieron los ataques contra el radicalismo obrero y campesino en todos los rincones de América Latina durante las décadas de 1960 y 1970, fue porque el trabajo ya se había hecho. Aunque la militancia obrera aumentó a mediados de la década de 1960 en respuesta a una situación económica que se deterioraba por momentos a medida que caían los precios del café, el movimiento en su conjunto permaneció débil y fragmentado. Así pues, con la clausura del espacio político en la arena civil, que bloqueó la reemergencia de cualquier populismo urbano enérgico en torno a los sindicatos, a la protesta social únicamente se le dejaba un camino. En las décadas de 1960 y 1970 la única opción viable para las fuerzas de la oposición se convirtió, inevitablemente, en la insurgencia armada.

Naturalmente, esta opción hundía sus raíces en los tiempos inmemoriales de las luchas campesinas y de las ocupaciones de tierras a lo largo de la frontera del café y en su desplome por la gran turbulencia de *la violencia*, cuya herencia, principalmente los asesinatos indiscriminados y el bandolerismo, se conservó hasta los primeros años del Frente Nacional. Y además todavía quedaban enclaves sin someter de resistencia comunista. En 1961, el hijo de Gómez, Álvaro, acuñó el término «repúblicas independientes» para referirse a las dieciséis zonas sobre las que el gobierno central no ejercía la soberanía territorial. Bajo la presidencia liberal de Lleras Camargo –responsable de aplastar la huelga de trabajadores fluviales de 1945 y elegido por Laureano Gómez como candidato para el Frente Nacional en 1958– estas «zonas rojas» fueron rodeadas por un cordón militar que las aisló eficazmente del mundo exterior. Pero a partir del momento en el que la Revolución Cubana había puesto a Washington en alerta roja, nuevamente urgía su erradicación.

El nacimiento de las FARC

En mayo de 1964, las Fuerzas Armadas Colombianas lanzaron la Operación Soberanía para recuperar el poder sobre el municipio de Marquetalia, un pequeño reducto comunista en el extremo sur de Tolima, situado en la frontera del Cauca y Huila. Helicópteros Huey, aviones de combate T-33, siete batallones armados, dos compañías especializadas en contrainsurgencia y los grupos de inteligencia (GIL) fueron enviados para acabar con la comunidad y con su ahora legendario líder Tiro Fijo. Pero en éste, como en otros ataques militares coordinados, se conquistó el territorio pero no se capturó al enemigo. Las familias, forzadas una vez

más a huir, encontraron una vía de salida o bien en el Cauca o bien en las tierras bajas tropicales de Caquetá y Meta; incapaces de instalarse en los pueblos, los combatientes formaron una fuerza guerrillera móvil. Las operaciones contrainsurgentes del Frente Nacional solamente tuvieron éxito en desencadenar una oleada de migraciones armadas desde las zonas montañosas del centro hacia la selva del suroeste. Bajo las salvas de apertura de la Operación Soberanía, los comandantes de Marquetalia, Río Chiquito y El Pato confluyeron en El Bloque Sur para hacer público un nuevo programa agrario²⁷. Éste fue el nacimiento de las FARC.

En aquellos mismos años emergieron otras dos fuerzas guerrilleras. El ELN se describe normalmente como un grupo nacido de la clase media y de base universitaria que seguía al pie de la letra la teoría del Che del *foco*. De hecho, no estaba menos arraigado en la historia del liberalismo popular, del comunismo y de las luchas campesino-proletarias que las FARC. El patriarca del clan Vázquez había participado en la toma por parte de los gaitanistas del puerto petrolero del país, Barrancabermeja, en 1948 y había estado al mando de milicias liberales durante *la violencia*; otros cuadros de los primeros tiempos fueron también veteranos liberales. Los hijos de Vázquez fueron a Cuba en 1962 para fundar un *foco* y terminaron defendiendo la revolución contra la invasión estadounidense en Escambray. A su regreso, crearon el primer *foco* del ELN en San Vicente de Chucurí, en Santander. Podían contar con el apoyo de las capas más influyentes del sindicato de trabajadores del petróleo, USO, tras la huelga contra la compañía petrolera estatal ECOPEPETROL, así como también con el de los viejos campesinos ocupantes de tierras que habían encabezado el «levantamiento bolchevique» en Líbano en 1929. En 1964, el ELN aceptó a su recluta más famoso, el sociólogo y sacerdote Camilo Torres Restrepo, cuya muerte en combate a principios de 1966 dio su primer mártir a la teología de la liberación²⁸.

El agrupamiento guerrillero maoísta llamado Ejército de Liberación Popular (EPL), formado en 1967, compartía el mismo origen con la lucha agraria. Uno de sus fundadores, Pedro Vázquez Rendón, había sido el comisario político del PSD en el sur de Tolima durante *la violencia* y fue él quien había sugerido que Pedro Antonio Marín se llamara Manuel Maru-

²⁷ Siguiendo el ejemplo de su base social constituida por ocupantes de tierras y pequeños propietarios, las FARC siempre han luchado, en la práctica si no en la teoría, por la reforma radical del capitalismo y del Estado, nunca por su derrumbe. Las FARC están en el mercado, no fuera o en contra de él, y en este sentido su distancia de Sendero Luminoso, el único grupo guerrillero latinoamericano que se apoya firmemente en el terror, no podía ser mayor.

²⁸ Torres, que estudió con el peruano Gustavo Gutiérrez en Lovaina, Bélgica, inspiró el texto antológico de Gutiérrez de 1967 titulado *Liberation Theology* [*Teología de la liberación*, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999] y analizado en Penny LERNOUX, *Cry of the People*, Nueva York, 1977, pp. 20-31. Acerca del ELN, véase Fabiola CALVO OCAÑO, *Manuel Pérez: un cura español en la guerrilla colombiana*, Madrid, 1998, y Carlos MEDINA GALLEGÓ, *ELN: una historia en dos voces contadas*, Bogotá, 1996.

landa, en honor a uno de los líderes del PSR. El propio PC-ML (Partido Comunista Marxista-Leninista) había nacido de las juventudes del PCC en 1965, tras la escisión sino-soviética. Con la ayuda del antiguo comandante guerrillero liberal y militante del MRL Julio Guerra, el EPL fundó un *foco* en una región periférica de Antioquia con el objetivo de librar una guerra popular prolongada²⁹.

Descontentos urbanos

No obstante, la valentía ideológica y la relativa legitimidad popular de los grupos guerrilleros de este periodo no deberían llevarnos a exagerar su magnitud. A mediados de la década de 1970, el EPL era prácticamente inexistente; el ELN fue prácticamente eliminado en Anorí en 1973 y las FARC todavía estaban confinadas, básicamente, en las regiones bajas de las montañas al sureste de Bogotá que habían contribuido a colonizar. Mientras tanto, en las ciudades, aunque la educación secundaria se extendió de manera sensible, el desempleo se incrementó acusadamente durante toda la década de 1960. Las medidas proteccionistas sobre la industria no lograron generar empleos y las clases medias y trabajadoras vieron defraudadas sus esperanzas de una mejora en su posición social.

En 1969, ANAPO obtuvo mayorías en los consejos municipales y en las asambleas provinciales. En 1970, Rojas Pinilla, presentándose como conservador pero empuñando un programa electoral opuesto al Frente Nacional, activó un discurso antioligárquico con reminiscencias del de Gaitán —aderezado por una defensa reaccionaria de la tradición católica que fue cediendo terreno gradualmente a la influencia de los medios de comunicación— para ganar aproximadamente el 39 por 100 de los votos, principalmente provenientes de la clase media y de la trabajadora. El Frente Nacional recurrió en el último momento a un fraude malamente disimulado para negarle la victoria e imponer a su candidato, el conservador Misael Pastrana. Una vez en el cargo, patrocinó obras públicas y de remodelamiento urbano en un intento de generar empleo y de aparentar que se estaba realizando una reforma.

López Michelsen (1974-1978), el corrupto hijo de López Pumarejo y antiguo rebelde de su partido, fue técnicamente el último presidente en desempeñar sus funciones bajo el Frente Nacional. Sedujo al electorado urbano que había apoyado a Rojas Pinilla hablando de dos Colombias: la primera, ligada al café y a la producción industrial, comprendía Antioquia, las provincias andinas orientales y el puerto caribeño de Barranquilla, y

²⁹ Sobre este grupo, véase Álvaro VILLARRAGA y Nelson PLAZAS, *Para reconstruir los sueños: una historia del EPL*, Bogotá, 1994; y Fabiola CALVO OCAMPO, *EPL: una historia armada*, Madrid, 1987.

recibía el grueso de la inversión gubernamental en infraestructura y en servicios públicos. La otra Colombia, de la que se decía que abarcaba el 70 por 100 del territorio nacional, era donde habitaban los negros, los indios y los colonos fronterizos y comprendía las llanuras y los valles del sur y del este y las costas del Pacífico y del Atlántico. Estas regiones apenas eran destinatarias de inversiones y, prácticamente, carecían de presencia estatal, de electricidad, de servicios públicos o, incluso, de una mínima infraestructura. Pero a pesar de que los precios del café alcanzaron temporalmente cotas nuevamente altas a mitad de la década de 1970, engordando así los presupuestos del Estado, el práctico colapso de las industrias tradicionales acompañado de la oposición de la elite provocó de manera irremediable que las promesas de reforma formuladas por López Michelsen se quedaran en una fantasía.

El descontento latente en las ciudades cobró un carácter dramático en 1974, cuando un grupo nuevo, el M-19 –llamado así a partir del 19 de abril, fecha en la que se habían robado las elecciones a Rojas Pinilla–, anunció su aparición robando la espada de Bolívar del museo de historia situado en el centro de Bogotá. Integrado por *anapistas* de clase media así como por jóvenes disidentes de las FARC y del PCC, el M-19 tuvo desde su surgimiento un agudo sentido para explotar, en la medida de lo posible, a los medios de comunicación para alimentar el mismo aura de bravuconada romántica que había rodeado a las guerrillas urbanas del Cono Sur, algunos de cuyos veteranos engrosaban las filas del *eme*. El objetivo declarado del M-19, un movimiento explícitamente nacional-popular con ambiciones electorales, no era acabar con el capitalismo o con el Estado colombiano, sino la apertura del sistema político existente. Generó un extendido apoyo difuso entre las capas obreras y de clase media que habían votado por Rojas Pinilla y por López Michelsen.

Durante los años intermedios de la década de 1970 se produjo una proliferación de protestas sociales en torno a los servicios públicos que estuvieron encabezadas por las clases trabajadoras de las periferias urbanas, las cooperativas y las asociaciones de vecinos movilizadas. En 1977, las tres confederaciones sindicales más importantes organizaron un *paro cívico*, o huelga civil, que el Estado castigó con una represión brutal. A partir de entonces, el elevado desempleo, los bajos salarios, una seguridad social deprimida y el aumento del «sector informal» –en el que en 1985 estaría empleada la mitad del proletariado colombiano– contribuirían al debilitamiento de un movimiento obrero que ya de por sí se encontraba dividido³⁰. El aplastamiento del *paro cívico* dispuso el escenario para una ofensiva generalizada que se llevó a cabo bajo el siguiente presidente liberal, César Turbay Ayala (1978-1982). Todo tipo de activistas políticos, así como cientos, si no miles, de personas inocentes se convirtieron

³⁰ Pierre GILHODES, «Movimientos sociales en los años ochenta y noventa», en Álvaro TIRADO MEJÍA (ed.), *La Nueva Historia de Colombia*, vol. VIII, Bogotá, 1995, pp. 171-190.

en objetivos «subversivos» del ejército, de la policía, de los servicios de inteligencia y de un número creciente de organizaciones paramilitares. Muchos de ellos fueron torturados, encarcelados o se convirtieron en «desaparecidos». Los escuadrones de la muerte, como la AAA (la Alianza Anticomunista), comenzaron a asesinar indiscriminadamente siguiendo el modelo argentino. La violencia política se hizo mucho más intensa de lo que lo había sido durante la década anterior.

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el clima global, marcado por la destrucción del movimiento urbano cívico y sindical, era de este modo propicio para el crecimiento de la guerrilla. Aún no estaba presente el ofuscador discurso en torno a los «actores armados de derecha y de izquierda» (como sería introducido por los analistas norteamericanos de El Salvador en la década de 1980). Políticamente, las guerrillas gozaron de cierto prestigio en las ciudades hasta mediados de la década de 1980, cuando muchos disidentes de clase media aceptaban la legitimidad de su lucha, siendo este apoyo incluso mayor en el medio rural, donde estas personas fueron testigos y también víctimas de violaciones de los derechos humanos. Además, al igual que el jacobinismo o el liberalismo popular de clase media, no suponía algo nuevo. La brutal reacción de la administración de Turbay, acompañada con las esperanzas infundidas por la revolución nicaragüense, devolvieron la vitalidad a las guerrillas. Afirmaban que el gobierno de Turbay en Colombia no era diferente de las juntas militares del Cono Sur, mientras que los sandinistas habían mostrado que la lucha armada era la única forma de derrocar a la dictadura.

Zozobra en los enclaves de exportación

Sin embargo, esta última fase del crecimiento guerrillero tuvo lugar en un escenario político-económico inmerso en un acelerado proceso de transformación. Durante el periodo de largo estancamiento de las décadas de 1960 y 1970, se había iniciado dentro de la oligarquía un proceso de reestructuración. Porciones importantes del capital habían desplazado sus intereses desde la producción hacia la especulación y la captura de rentas. Los nuevos enclaves, donde predominaba el capital extranjero y la producción de un único bien destinado a la exportación, se multiplicaron: las zonas petroleras de Arauca y Santander, la industria del carbón en la Guajira y los plátanos en Urabá. El tráfico de marihuana, en un principio organizado por veteranos de los cuerpos de paz y rápidamente asumido por los contrabandistas colombianos, floreció en las provincias del Cauca, César, Guajira y Magdalena³¹. El sector de la construcción y la banca aumentaron considerablemente. La base conservadora continuó reduciéndose.

³¹ Darío BETANCOURT y Martha LUZ GARCÍA, *Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social de la mafia colombiana (1965-1992)*, Bogotá, 1994, p. 47.

Fue en este mismo contexto en el que el ELN, renacido de las cenizas de su práctica aniquilación en Anorí, comenzó desde finales de la década de 1970 a tener como objetivo de sus ataques los enclaves de la exportación, emergiendo en las regiones petroleras de Arauca y Santander y, posteriormente, en la zona minera carbonífera de El Cerrejón, con una nueva visión revolucionaria que seguía más el ejemplo de América Central que el de Cuba. Basado tradicionalmente en la teología de la liberación, reforzó los vínculos con los movimientos populares y comenzó a trabajar estrechamente con los sectores marxistas más militantes de los sindicatos de trabajadores del petróleo, USO, justo en el momento en el que el petróleo sustituía al café como el bien legítimo más importante destinado a la exportación en Colombia. A mediados de la década de 1980, el ELN obtenía por la fuerza las rentas del petróleo de las multinacionales alemanas contratadas para construir el oleoducto del Caño-Limón en Arauca (con la ayuda encubierta del gobierno de Kohl).

Entretanto, en 1978, el M-19 inició sus primeras operaciones urbanas. El año siguiente sus militantes robaron 4.000 ametralladoras de la armería de Bogotá y, en 1980, ocuparon la embajada dominicana cuando el enviado estadounidense se encontraba en su interior, en una típica operación relámpago que no precisaba de una amplia base social ni de la movilización³². Por su parte, el EPL renunció en 1980 al maoísmo –que le había llevado a numerosas divisiones internas– e hizo modestos avances en el territorio ganadero de Córdoba y en la zona platanera de Urabá, que disputaría a las FARC en las décadas de 1980 y 1990. Los trabajadores mayoritariamente afrocolombianos de esta área habían organizado un sindicato, pero, al igual que el movimiento indígena en el Cauca, CRIC, los bananeros se enfrentaron a niveles muy fuertes de violencia estatal y paramilitar y, asimismo, ambos también se enfrentarían, más tarde, a la violencia de las FARC³³.

En cuanto a las FARC, también abandonaron su estrategia defensiva –y, con el tiempo, sus antiguas tradiciones heredadas de la lucha agraria– para proyectarse por todo el territorio nacional ante esta competición armada de la izquierda. A principios de la década de 1980, se habían expandido desde sus bases en Caquetá, Meta y Putumayo hasta el enclave bananero

³² Sobre el M-19, véase Darío VILLAMIZAR, *Aquel 19 será*, Bogotá, 1995; Laura RESTREPO, *Historia de un entusiasmo*, Bogotá, 1999; y acerca de su destino, véase Ricardo PEÑARANDA y Javier GUERRERO, *De las armas a la política*, Bogotá, 1999.

³³ Fernando BOTERO HERRERA, *Urabá: colonización, violencia, y crisis del Estado*, Medellín, 1990; Clara Inés GARCÍA, *Urabá: Región, actores y conflicto, 1960-1990*, Bogotá, 1996; William RAMÍREZ TOBÓN, *Urabá: Los inciertos confines de una crisis*, Bogotá, 1997. A mediados de la década de 1980, en el Cauca, la violencia de las FARC y paramilitar-estatal llevó a la formación de un grupo guerrillero indígena, el Quintín Lame, que depuso las armas en 1991. Después de que en 1992 los trabajadores plataneros organizaran una huelga de solidaridad secundada por 20.000 personas, las FARC masacraron a muchos de ellos en 1993, proclamando que los trabajadores afiliados anteriormente al EPL se habían convertido en paramilitares después de la «paz» de 1991. A mediados de la década de 1990, las FARC cometerían diversas masacres contra los trabajadores bananeros.

de Urabá en el noroeste, el Magdalena Medio y las llanuras del sureste de Guaviare, Vichada y Vaupés. Ésta fue la rampa de lanzamiento desde la cual, nutridas por los impuestos sobre la nueva y floreciente industria nacional de la cocaína, se metamorfosearían gradualmente en una empresa militar dedicada principalmente a la expansión territorial.

Los narcóticos se introducen en el sistema

La fumigación de la marihuana en el Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con la extradición a Estados Unidos de los traficantes más importantes, se inició, bajo la presidencia de Turbay, en el preciso momento en el que la cocaína sustituía a la marihuana como el producto destinado a la exportación más rentable. En muchos aspectos, el gobierno de Turbay marca el comienzo del actual ciclo histórico. El Partido Liberal ganó un nuevo vigor con el mercado de drogas. Los modernizados tecnócratas de Bogotá vieron disminuir su limitado poder sobre los departamentos a medida que los nuevos intermediarios políticos –más corruptos, cínicos y dispuestos a colaborar con la mafia de la cocaína de lo que lo estuvieron los caciques tradicionales– dominaron el panorama político tanto regional como local. El clientelismo provincial se modernizó y el estamento militar y la policía asumieron papeles más relevantes como defensores del «orden público». También fue durante el mandato Turbay cuando Álvaro Uribe Vélez comenzó su carrera política concediendo licencias de vuelo a los traficantes de drogas desde su puesto como jefe de AEROCIVIL. Pablo Escobar y otros destacados traficantes comenzaron en esos momentos a hacer incursiones en la política nacional, principalmente a través del Partido Liberal. El propio Pablo Escobar se convirtió en un diputado liberal del Congreso, alineado con Alberto Santofimio, uno de los caciques a la vieja usanza más corrupto³⁴.

Hasta las elecciones de 1982, el tema del dinero procedente de las drogas en la política ni siquiera se planteó. Escobar y el resto de traficantes se movían libremente: durante el periodo de cuatro meses que Uribe ocupó el cargo de alcalde de Medellín en 1982, la ciudad era conocida como «el santuario». La elaboración y el transporte de la cocaína –centrados, como lo había estado la industria del café, en Medellín– conectó a la primera

³⁴ Escobar y otros socios, como su primo Gustavo *Osito* Gaviria o el Negro Galeano, provenían de los barrios humildes de Envigado y habían adquirido una valiosa experiencia en las guerras del tabaco libradas en Urabá a principios de la década de 1970. La elite de Medellín, en un primer momento les impidió participar de la industria y les privó de ser miembros de sus clubes exclusivos. Los *capos* de Cali, que tenían sus orígenes en las clases medias y en las capas más altas de éstas, tenían notablemente más éxito para integrarse discretamente en la oligarquía regional, aunque Chepe Santacruz tuvo que crear su propio club después de ser despreciado por el Club Colombia. Cuando los dos carteles fueron desmantelados a mediados de la década de 1990, proliferaron cientos de pequeños consorcios más descentralizados y su influencia en la política, especialmente en el Partido Liberal, continúa sin ser fiscalizada.

Colombia de las tierras altas centrales y del oeste con la segunda Colombia de las tierras bajas del este y de las costas del Atlántico y del Pacífico a través de nuevas ciudades (Florencia, Villavicencio, Leticia) así como de carreteras, aeropuertos y lanchas motoras. Respecto a los colonos fronterizos en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Sucre, Córdoba, el Chocó, Bolívar, los Santanderes y, en menor medida, en Antioquia, Huila, Tolima, Cauca y Meta, la coca se convirtió en el único cultivo suficientemente rentable como para superar los elevados costes del transporte derivados de la falta de infraestructura³⁵. Medellín comenzó a recuperar algo de su descolorida gloria industrial, convirtiéndose en el eje más importante de la única industria que los colombianos poseían y controlaban. Este proceso se vio favorecido por la migración antioqueña a los Jackson Heights, en Queens, que proporcionó a Escobar, a los Ochoa, a los Galeano, a Fidel Castaño, a Kiko Moncada y a otros las redes de distribución a la medida de sus necesidades.

Los secretos de la supervivencia

Sin el desarrollo de la economía de la coca desde finales de la década de 1970, las FARC no hubieran tenido ni una red geográficamente extendida de clientes semidependientes en las abiertas fronteras de la coca ni un arca con miles de millones de dólares destinados a la guerra con la que expandir sus operaciones y, en consecuencia, el ejército colombiano se vería enfrentado a la tarea de recuperar simplemente una amplia región del sureste y no más del 40 por 100 de un territorio nacional dividido por tres cordilleras e incontables ríos.

No obstante, cuando se intenta responder a la cuestión de por qué, década tras década, el Estado ha permanecido impotente para acabar con el núcleo duro de la resistencia armada, hay otros factores decisivos en juego. Hasta la década de 1990, la natural simpatía popular hacia las «zonas liberadas» brindó a las guerrillas un apoyo importante. Las FARC eran las fuerzas armadas de un movimiento colonizador de campesinos y sus vínculos con las comunidades en las regiones del sureste eran sólidos. Éstas se encontraban en territorios escasamente poblados que el gobierno colombiano nunca había administrado —sin infraestructuras ni servicios públicos e, incluso, sin relaciones clientelistas con los partidos—,

³⁵ Para la colonización de Guaviare y Vaupés, véase A. Molano, *Selva adentro*, cit.; y sobre Vichada y Guainía, véase, también de A. MOLANO, *Aguas arriba*, Bogotá, 1990. La historia de la frontera de la coca es explorada en William RAMÍREZ TOBÓN, «La guerrilla rural en Colombia: ¿Una vía hacia la colonización armada?», *Estudios Rurales Latinoamericanos*, vol. 4, núm. 2, 1981, pp. 199-209; Fernando CUBIDES *et al.*, *Colonización, coca, y guerrilla*, Bogotá, 1989; Alfredo MOLANO «Algunas consideraciones sobre la colonización y violencia», en Catherine LEGRAND *et al.* (eds.), *El agro y la cuestión social*, Bogotá, 1994, pp. 27-41; y para un resumen del debate, C. LEGRAND, «Colonización y violencia en Colombia: Perspectivas y debate», en *El agro*.

pero que habían vivido momentos intermitentes de prosperidad gracias al caucho y la quinina. Después de la década de 1950, se llenaron de personas que huían de la violencia de los partidarios en las tierras altas de las montañas. Desde la década de 1960 hasta la de 1980, las FARC enarbolaron la bandera del agrarismo radical: la única fuerza –aparte del PCC, al cual estaban ligados orgánicamente– dispuesta a pedir al gobierno que cumpliera la promesas de la reforma de la tierra, el desarrollo de infraestructuras, el establecimiento de cooperativas de crédito y la asistencia técnica; de hecho, la única –al menos en las selectas regiones fronterizas– en asumir aquellas tareas en las que el Estado había fracasado o había descartado realizar. En muchas áreas del sureste, las FARC fueron la administración local y regional y, hasta donde alcanzaba la memoria, incluso en sus peores versiones, se comportaban mejor que el gobierno nacional o los traficantes.

Efectivamente, en algunas zonas las FARC han proporcionado la única medida de protección disponible para los cultivadores de coca frente a la arbitrariedad indiscriminada de los traficantes. Los mecanismos de control de la fuerza de trabajo basados en las deudas con sus «contratos» avalados con la propia vida –ya fueran heredados de la época del auge del caucho en el sureste o tuvieran su origen en las minas de esmeraldas en las tierras altas de Boyacá– otorgan a las FARC el papel de anhelados árbitros del mercado de trabajo en áreas fronterizas como Meta y Guaviare. Hasta hace muy poco tiempo, la violencia de las FARC se desplegaba de acuerdo a reglas predecibles, aunque despiadadas, que podían garantizar el «orden» y la «estabilidad» en la frontera, mientras el narcoterror conducía al «caos» y a la «incertidumbre», particularmente en cuanto al precio de la pasta de coca. En otras palabras, las FARC han posibilitado el funcionamiento sin sobresaltos del mercado de la pasta de coca, ya que sin ellos los narcos se podrían haber destruido unos a otros mediante interminables miniguerras en la selva. Además del mantenimiento de una reserva de apoyo en las regiones fronterizas, la imposición de la ley y el orden ha permitido a las FARC embolsarse ingentes sumas de dinero gracias a su máquina de guerra mediante la exigencia del pago de un impuesto conocido como *el gramaje* que, a pesar de que las cifras son, por definición, imposibles de confirmar, según un experto, en 1999 recaudó 900 millones de dólares³⁶. Si bien, al carecer de redes de distribución y de transporte extensas, las FARC no están en una posición que les permita competir con las Autodefensas

³⁶ Véase Bruce BAGLEY, «Drug Trafficking, Political Violence, and US Policy in Colombia in the 1990s», disponible en www.mamacoca.org. Aunque la recaudación de impuestos sobre la producción de coca (*el gramaje*) es una táctica legítimamente revolucionaria, en Colombia forma parte de un modelo de extorsión establecido durante *la violencia*, en el que el secuestro, *la vacuna* y *el boleteo* (el cobro de los impuestos de guerra mediante cartas amenazadoras) fueron empleados como tácticas para recaudar fondos, especialmente en Quindío y en Risaralda, regiones dedicadas al café que habían sido el hogar de cuadrillas de bandidos, así como de la familia Vázquez (ELN) y de Tiro Fijo (FARC).

sas Unidas de Colombia (AUC) en los mercados internacionales, al menos pueden ofrecer alimento, ropa, armas de alta tecnología, un teléfono móvil y un salario mensual a la empobrecida juventud rural que no quiere servir como soldado del gobierno ni ser paramilitar.

Los señores de la droga y los escuadrones de la muerte

Los paramilitares, con sus vínculos con los cuerpos represivos del Estado, la Iglesia Católica y los dos partidos, han sido capaces de beneficiarse del negocio de la cocaína a una escala mucho mayor que las FARC: en una entrevista celebrada en octubre de 2000, Carlos Castaño hizo una estimación (prudente) según la cual el 70 por 100 de los recursos de la AUC provenía del comercio de droga. Están implicados no sólo en la recaudación de impuestos y en tramas de protección relacionadas con la pasta de coca, sino también en su transporte y en su distribución³⁷. Este papel lucrativo se lo deben a su origen como escuadrones de la muerte de los carteles de la droga. A principios de la década de 1980, traficantes como Escobar, los Ochoa, Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha, enfurecidos por las incursiones de la guerrilla en sus actividades, organizaron el MAS, o «Muerte a los Secuestradores», para acabar con los insurgentes. Éstos fueron los antecedentes armados de las actuales Autodefensas Unidas de Colombia: las AUC. Rodríguez, el traficante más virulentamente anticomunista, que había servido como teniente bajo las ordenes de Gilberto Molina en las minas de esmeraldas de Boyacá, donde cada *capo* tenía un rudimentario aparato militar para ejercer el control sobre la fuerza de trabajo y sobre los rivales, sirvió como intermediario entre el narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio y el de las tierras bajas del sureste, es decir, entre la primera Colombia y la segunda³⁸.

Carlos Castaño, líder de las AUC, describe una formación más internacionalista en su autobiografía publicada en 2001 y titulada *Mi confesión*. Como antiguo explorador militar de dieciocho años que sirvió en las filas del MAS, fue enviado a Israel en 1983 para ser entrenado. Al detallar cómo ordenó y participó en masacres de civiles, Castaño insiste en que

³⁷ Jeremy BIGWOOD, «Doing the US's Dirty Work: The Colombian Paramilitaries and Israel», citando un Informe de la DEA de 1998: www.narconews.com.

³⁸ Otro mediador fue Pedro Juan Moreno Villa, que como cabeza de la asociación de ganaderos en Antioquia en 1983 defendió el MAS en un debate público mantenido con Lara Bonilla en Puerto Berrío, una década y media antes de que él facilitara la reconquista de Urabá. Sobre Rodríguez Gacha, véase Jorge Enrique VELÁSQUEZ, *El Navegante, Cómo me infiltré y engañé al Cartel*, Bogotá, 1992. Escobar, por el contrario, que se consideraba a sí mismo un hombre de izquierdas, enemigo del imperialismo y de la oligarquía, mantuvo contactos con el M-19 a principios de la década de 1980 y con el ELN a principios de la de 1990. Esto le acarreó fricciones con algunos socios en el negocio, como Fidel Castaño, quien posteriormente colaboró en su asesinato: ALONSO SALAZAR, *La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo de narcotráfico*, Bogotá, 2002, pp. 85-87, 103 y 268.

«copié el concepto de fuerzas paramilitares de los israelíes»³⁹. Las lecciones aprendidas en Oriente Próximo y en Gaza se aplicaron en la región del Magdalena Medio, donde el MAS había comenzado a «fumigar» a los sospechosos de ser comunistas y a los simpatizantes de la guerrilla a principios de la década de 1980, cuando Castaño se encontraba allí trabajando bajo la dirección de su hermano, Fidel —quien se retiraría pronto para dedicarse más plenamente al paramilitarismo— y de Escobar.

Cuando la violencia iniciada por Turbay desencadenó un torbellino imposible de controlar, el presidente conservador, Belisario Betancur (1982-1986) realizó el primer intento de negociar un alto el fuego. Antiguo seguidor de Laureano Gómez, pero por su temperamento, en muchos sentidos, un solitario dentro de la clase dirigente, Betancur estaba conmovido por las penalidades de la población y deseaba mejorar su situación. En 1982, como primer paso, declaró una amnistía y liberó a varios cientos de militantes guerrilleros y políticos encarcelados bajo el gobierno de Turbay, proclamó que la desigualdad social tenía la culpa de los males extendidos por las guerrillas e insistió en la supervisión ejecutiva, más que legislativa, de las negociaciones sobre el alto el fuego, si bien cualquier reforma propuesta hubiera tenido que ser aprobada por el Congreso. Parecía que con ello se abría una ventana a través de la cual era posible vislumbrar una desmilitarización de la vida sociopolítica y una discusión seria de problemas tales como la desposesión violenta en el medio rural y el desempleo en las ciudades. Por su parte, las FARC, en una атаque encubierto al ELN, que no había tomado parte en el alto el fuego, denunciaron «el secuestro y todas las formas de terrorismo que amenazaban la dignidad y la libertad de los seres humanos»⁴⁰.

Las contradicciones de la paz

Pero Betancur nunca tuvo el apoyo de sus generales ni un respaldo fuerte por parte de ninguna fracción de la clase dominante, dependiendo del Congreso para llevar a cabo cualquier cambio estructural. Carecía tanto del poder como de la voluntad para persistir en realizar una auténtica reforma social. Los tres grupos insurgentes con los que entabló una nego-

³⁹ Citado en J. Bigwood, «Doing the US's Dirty Work», cit. Aunque el odio entre los narcotraficantes y las guerrillas se atribuye, normalmente, al secuestro por el M-19 de un familiar de uno de los traficantes más importantes, Marta Nieves Ochoa, en 1980, que llevó a la formación del MAS, los disputados beneficios del negocio de la cocaína residen en la raíz de la contienda. Aparentemente, las FARC habían robado mercancías de Rodríguez Gacha en uno de sus mayores laboratorios de cocaína, Tranquilandia, en Meta. Véase A. Salazar, *La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo de narcotráfico*, cit., p. 111.

⁴⁰ Alfredo MOLANO, «Fórmulas», *El Espectador*, 15 de septiembre de 2002. El examen más exhaustivo del proceso de paz es el realizado por Mark CHERNICK, «Insurgency and Negotiations: Defining the Boundaries of the Political Regime in Colombia», tesis doctoral, Colombia University, 1991.

ciación –las FARC, el EPL y el M-19– podían darse cuenta de esto y utilizaron las negociaciones para reforzar su propia posición, llamar la atención sobre los crecientes abusos del ejército y de los paramilitares y desplegar espectaculares operaciones militares. Cuando se alcanzó el acuerdo a finales de 1984, las FARC habían doblado el número de sus frentes, pasando de catorce a veintiocho. Por otro lado, los narcoparamilitares –ayudados por el ejército y por oficiales de la policía, así como por los líderes del Partido Liberal y del Partido Conservador en los municipios– se prepararon para futuras batallas, como hizo una de las alas de las internamente divididas FARC. El crecimiento espectacular de la industria de la cocaína no hizo crecer la disposición para alcanzar un acuerdo⁴¹. Además, dentro del gobierno, la figura encargada de gestionar los contactos con el M-19, el EPL y las FARC, Jaime Castro Castro, era el padrino político del jefe del Partido Liberal, Pablo Emilio Guarín Vera, quien estaba estrechamente vinculado a la narcoviolencia, especialmente en Puerto Boyacá, donde uno de los campos de entrenamiento paramilitar, cuyo personal estaba integrado por mercenarios británicos e israelíes de paso hacia América Central, llevaba su nombre.

En 1985, el M-19, con la esperanza de que una huelga general convocada en junio de ese año se convirtiera en una insurrección urbana, y en protesta por las violaciones por parte del ejército de los acuerdos de alto el fuego, se retiró unilateralmente de la tregua. En noviembre, sus mandos organizaron una toma espectacular del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, capturando a la Corte Suprema en su interior y solicitando entablar unas negociaciones. El ejército respondió destruyendo el edificio en un ataque en el que se utilizaron tanques y que terminó con la matanza de todas las personas que se encontraban en su interior. A Betancur ni siquiera se le consultó: el alto mando dejó claro que si objetaba algo, sería derrocado. La masacre marcó el comienzo del fin del M-19 como fuerza político-militar.

Evitando este tipo de aventuras y prefiriendo una estrategia de «combinación de todas las formas de lucha», las FARC y el PCC formaron la Unión Patriótica (UP), como un frente civil concebido para ayudar a consolidar un poder de base dentro del sistema político formal antes de deponer las armas. En 1986, tras seis años de una creciente actividad huelguística, nació una federación de sindicatos progresista, la CUT, lo cual suponía otro indicio del desarrollo de la protesta popular. Si bien en las regiones donde se estaba produciendo la colonización de la frontera, como Urabá y el Chocó, las comunidades campesinas con una fuerte presencia afrocolombiana hicieron del UP su vehículo para promover la democracia

⁴¹ Las ventas de la cocaína, la marihuana y la heroína colombianas generaron, estimativamente, unos ingresos de 46.000 millones de dólares en 1999, lo que reportó unos dividendos para Colombia de 3.500 millones de dólares; una suma prácticamente equivalente a los 3.900 millones provenientes del petróleo, la principal exportación del país: véase, B. Bagley, «Drug Trafficking, Political Violence, and US Policy in Colombia in the 1990s», cit.

radical, esta estrategia comportaba graves riesgos para los partidarios de las FARC y del PCC⁴². Dado el endurecimiento de la derecha narcoparamilitar como un bloque históricamente opuesto a las negociaciones de paz, una política electoral tan íntimamente unida a la insurgencia guerrillera más importante del país tenía todas las probabilidades de acabar en una ejecución extrajudicial generalizada de los políticos y los militantes de izquierdas, especialmente a escala local. Además, hubo una facción dentro de las FARC que comprendió esto y que defendió un aumento de la militarización⁴³. Confirmando trágicamente su postura, en 1987 la derecha asesinó a trescientos militantes de la UP, entre ellos el candidato a la presidencia, Jaime Pardo Leal, así como a muchos miembros importantes de la dirección de la CUT. En 1991 serían asesinados más de tres mil activistas de la UP.

En un recrudecimiento de la violencia ejercida por la corriente ultraderechista, al final de la década de 1980 fueron asesinados estudiantes, profesores y profesionales como el Dr. Héctor Abad Gómez y también prostitutas, homosexuales, travestis, ladrones, pequeños traficantes y consumidores de drogas, en operaciones de «limpieza social» que se generalizaron en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Barranquilla. De manera dramática, también se vieron afectadas las milicias populares que habían emergido en los barrios periféricos de las ciudades más importantes de Colombia después de 1985 para erradicar los efectos perniciosos del tráfico de drogas en la vida comunitaria. No obstante, en 1987 y 1988, bajo los disparos de las fuerzas armadas y de sus aliados paramilitares, los movimientos sociales organizaron marchas masivas tanto en las ciudades como en el campo y se acercaron a las guerrillas insurgentes, particularmente a las FARC y al ELN. Este último había experimentado un acelerado crecimiento durante el periodo del alto el fuego y, en 1987, fundó la Coordinación Guerrillera Simón Bolívar junto a las FARC. Sin embargo, las promesas de unir la insurgencia se revelaron ilusorias a medida que se prolongaba la atmósfera de enfrentamiento sectario que había caracterizado a la izquierda desde la década de 1930⁴⁴.

⁴² Sobre esta cuestión estoy en desacuerdo con Molano, quien sostiene que se trató de una estrategia «certada». Aunque no es fácil exponer en detalle una alternativa viable, las FARC podrían al menos haber aplicado las fuertes medidas de seguridad que exigía la situación, protegiendo a sus miembros y a sus aliados en la UP de afrontar riesgos innecesarios. Podrían, también, haber contemplado la organización en los barrios y en los centros de trabajo en las ciudades, antes que crear milicias entre las personas desplazadas en las afueras de la ciudad.

⁴³ Esta facción es actualmente dominante dentro del Estado Mayor de las FARC y su mejor representante es Jorge Briceño, alias el *Mono Jojoy*, que es el comandante militar de las FARC.

⁴⁴ Como prácticamente todo en Colombia, las relaciones entre las FARC y el ELN varían de una región a otra. En algunas áreas, tales como el sur de Bolívar, las FARC y el ELN llevan a cabo ataques conjuntos contra las bases paramilitares, mientras que en algunas zonas de Antioquia, las FARC prácticamente han declarado la guerra al ELN.

Mientras tanto, cuando estaba siendo concluido el alto el fuego con las guerrillas a finales de 1984, Escobar asesinó al ministro de Justicia de Betancur, Lara Bonilla. El crimen de Lara Bonilla había sido resistir a la influencia de la mafia de la coca en la política del Partido Liberal y mostrar las conexiones existentes entre los oficiales militares, los rancheros de ganado y los narcotraficantes, patentes en la formación del MAS⁴⁵. Como consecuencia del proceso de paz, Escobar y el cartel de Medellín se alinearon con los jefes del Partido Liberal en las provincias, y con las facciones del ejército y de la policía, determinando progresivamente los parámetros de la política colombiana. Los narcos, inicialmente concentrados en el Magdalena Medio, aumentaron sus inversiones en tierras. Los vínculos entre los comerciantes de cocaína, que también habían invertido elevadas sumas en las finanzas y en el sector de la construcción, y las recién formadas fuerzas de «autodefensa» se volvieron más firmes y sistemáticos.

Bajo la presión de Washington, el gobierno de Barco que asumió el poder en 1986 –gracias a una victoria liberal arrolladora en unas elecciones con un bajo porcentaje de participación– comenzó la persecución del cartel de Medellín. Escobar Inc. respondió dando órdenes de atacar a los cargos situados en los escalafones más altos de la judicatura, así como de las fuerzas de seguridad y de la clase política. En un redoblamiento de los esfuerzos del gobierno de Barco, después de que los pistoleros a sueldo de Escobar asesinaran al candidato a la presidencia de centroizquierda, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, se declararon ilegales más de doscientos grupos paramilitares debido a sus conexiones con el mercado de la cocaína. El año siguiente, los adolescentes asesinos de Escobar abatieron a tiros a dos candidatos a la presidencia de la izquierda: Carlos Pizarro, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo, de la UP. El castigo que recibió Escobar fue bastante suave, ya que se le permitió construirse una prisión y que el personal de la misma estuviera integrado por los guardaespaldas de su preferencia, donde permaneció hasta que se escapó en septiembre de 1992. Su muerte a finales de 1993 a manos de antiguos socios –en colaboración con el cartel de Cali, la DEA, la CIA, la DAS colombiana, la CTI, la Cuarta Brigada del Ejército, etc.– no redujo el control mantenido por la derecha narcoparamilitar sobre el sistema político. Meramente eliminó a su cabeza más visible.

La burbuja de la narcoconstrucción de Gaviria

Durante la década de 1980, a pesar de las múltiples formas de violencia, y en agudo contraste con la mayoría de países de América Latina, el cre-

⁴⁵ La represión del negocio de la cocaína después del asesinato de Lara Bonilla ayudó a superar la crisis en la que había caído en 1983. El día del entierro de Lara Bonilla, por ejemplo, en Calamar (Guaviare) el precio de un kilo de pasta de coca (*bazuco*) costaba 200.000 pesos y una semana después costaba 800.000 pesos: A. Molano, *Selva adentro*, cit., p. 100.

cimiento económico se mantuvo estable, exactamente como en el pasado había experimentado un florecimiento durante *la violencia*. El tecnócrata liberal elegido en 1990, César Gaviria, no estaba satisfecho. Con la convicción de que el aumento (moderado) de los precios que había acompañado al crecimiento se debía a la excesiva intervención estatal en un país que tenía que incorporar todavía el saludable mensaje del consenso de Washington, se embarcó en un programa neoliberal que estaba destinado a disciplinar y a galvanizar la economía. Con la ayuda de Álvaro Uribe, en aquel momento senador del Partido Liberal, Gaviria metió la tijera en el personal al servicio del sector público y emprendió la privatización de la asistencia sanitaria y de la seguridad social, así como la instauración de la autonomía del banco central, la liberalización del sector monetario y financiero, la reducción de los aranceles y de los cupos de importación y el incremento de los impuestos sobre las actividades económicas. Los contratos para la explotación de los yacimientos petrolíferos se firmaron en condiciones aún más desventajosas que antes. Las importaciones de alimentos crecieron más del triple durante la década de 1990, pasando de 215 millones a 715 millones de dólares. En la segunda mitad de esta década, también se triplicó el área dedicada al cultivo de coca expandiéndose, aproximadamente, a 170.000 hectáreas en 2001. La producción de adormideras pasó de ser igual a cero en 1989 a 61 toneladas métricas en 1998, al mismo tiempo que Colombia también continuaba suministrando el 40 por 100 de las importaciones de marihuana de Estados Unidos, de tal manera que difícilmente pudo haber sido más directa la conexión entre las políticas agrarias neoliberales y la expansión de los cultivos ilegales. Uno de los primeros efectos de la reestructuración consistió en potenciar el auge de las obras financiadas por los narcos, que condujo a un aumento de la inflación. No resulta accidental que un informe de la OCDE sobre las reformas de Gaviria concluyera que, tomando en consideración a todos los sectores económicos, los carteles de las drogas se veían más beneficiados que ningún otro por sus políticas neoliberales, mucho más que el industrial, el agrícola, los dedicados a las exportaciones modernas o a los servicios financieros (dejando a un lado a las fuerzas armadas o a la Iglesia)⁴⁶.

La otra gran iniciativa de Gaviria fue la convocatoria de una asamblea constituyente para dar a luz una nueva Constitución más democrática. Este hecho podía ser leído como un segundo intento de poner punto final a la prolongada esclerosis padecida por la política colombiana. El EPL, el M-19 y otros dos grupos guerrilleros, el Quintín Lame y el PRT, depusieron las armas para participar en este proceso que, de hecho, otorgó el histórico derecho de reconocimiento a los pueblos indígenas. Pero aunque la Constitución de 1991 fue un intento de racionalizar el poder judicial y de limitar la autoridad del ejecutivo, introduciendo la representación pro-

⁴⁶ Sebastián EDWARDS, *The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Colombia*, Informe de la OCDE de 2001, pp. 39-41 y cuadro 3.3.

porcional para ser candidato al Senado y la elección popular de los gobernadores provinciales, previamente nombrados por el presidente, la misma no hizo nada para frenar las facultades discrecionales del ejército y de la policía o para romper la hegemonía del bipartidismo imperante en el sistema político. No era ésta su intención. Los planes de Gaviria tenían poco del incentivo moral que animaba los esfuerzos de Betancur —aunque buscaba negociar con Escobar, perseguía una «guerra holística» contra las FARC, atacando y ocupando sus bases en mayo de 1992— y sus resultados fueron magros, cuando no perversos. Las rígidas disposiciones de la nueva Constitución relativas a la descentralización, incluida la transferencia preceptiva de competencias por parte del gobierno central a las provincias, reforzaron el poder de los dirigentes locales de los partidos, especialmente de los liberales, aumentando la corrupción política —que según estimaciones realizadas por el Banco Mundial cuesta a Colombia cerca de 2.200 millones de dólares al año— y abocando al país al déficit presupuestario⁴⁷.

El siguiente presidente liberal, Ernesto Samper (1994-1998), pronto se vio enfangado en acusaciones que le inculparon de haber recibido millones de dólares del cartel de Cali para financiar su campaña, lo cual finalmente forzó a Estados Unidos a retirar al país su acreditación de estar dedicando los esfuerzos necesarios a la guerra contra las drogas. Entretanto, una severa rigidez de la política monetaria por parte del banco central había detenido la inversión y la industria de la construcción se sumió en una recesión. El FMI, reunido en 1998 para solucionar la peor crisis económica de Colombia desde la década de 1930, no pudo haber sido más benévolo, al disponer en su programa de reforma estructural de 1999 que debía optarse por la «flexibilidad» para hacer frente a «acontecimientos fuera del control del gobierno».

Las mutaciones de la guerrilla

En este mismo estado de parálisis generalizada, el agravamiento de la corrupción y la involución de la clase dirigente colombiana habían comenzado a contaminar a aquellos que habían estado dispuestos a resistir. Sin el dinamismo voraz de la economía de la cocaína, al menos algunos sectores de la oligarquía podrían haber tomado más en serio la posibilidad de un cambio, sobre todo la reforma agraria. Si esto hubiera ocurrido, los negociadores podrían haber arrancado más al bando insurgente. Del mismo modo, sin los ingresos reportados por el *gramaje*, las FARC hubieran tenido que considerar más cuidadosamente una estrategia de reforma política antes de afincarse en la confrontación militar. Tal y como se sucedieron los acontecimientos, durante la década de 1990 los insurgentes exhibieron la paradoja fundamental que entraña una progresiva deslegitimación política

⁴⁷ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *Colombia: Country Profile, 2002-2003*.

acompañada de un asombroso desarrollo organizativo. En noviembre de 1992, un grupo formado por los escritores e intelectuales progresistas más importantes del país, entre ellos Gabriel García Márquez, escribió una carta abierta a las FARC y al ELN, donde se les interpelaba a reconocer que la rueda de la historia había dado otra vuelta, a que depusieran las armas y a buscar una reforma mediante medios pacíficos. Durante toda la década de 1980, las guerrillas habían podido contar con la simpatía de una minoría sustancial de la industria cultural y con vínculos con los sindicatos más combativos. En la década de 1990 estaban mucho más solas.

No obstante, su expansión financiera y territorial –acompañada del recurso a técnicas como el secuestro y los coches bomba que habían sido introducidas por Escobar– se multiplicó exponencialmente. En la actualidad, las FARC generan una suma estimada de 500 millones de dólares al año proveniente de la extorsión y de los impuestos sobre la pasta de coca. Mientras que en 1978 tenían abiertos 17 frentes en las regiones periféricas, en 1994 las FARC tenían 105 e influían en la política de más de la mitad de las municipalidades colombianas. El ELN pasó de estar integrado por unos cientos de combatientes en los primeros años de la década de 1980 a aglutinar una cifra estimada entre los 5.000 y los 7.000⁴⁸. Al comienzo del nuevo siglo, más del 90 por 100 de los municipios en las zonas recién colonizadas estaban condicionados por la presencia de las guerrillas. Entre ambas, las FARC y el ELN operaban a lo largo de más del 40 por 100 del territorio nacional, aunque las FARC eran mucho más fuertes y territorialmente expansivas. En enero de 2000, el general Tapias –una fuente no necesariamente fidedigna–, entonces cabeza de las fuerzas armadas colombianas, estimó que las FARC tenían en su poder 20.000 fusiles de asalto de Alemania Oriental, así como también lanzagranadas, equipos de comunicaciones, morteros, misiles tierra-aire SAM-12 y una pequeña fuerza aérea.

El Plan Colombia

Sin embargo, mayor aún ha sido la expansión experimentada por los paramilitares. Las AUC, que cuando fueron oficialmente fundadas en 1997 estaban integradas por unos cuantos miles de combatientes, crecieron hasta estar integradas, en 2002, por una cifra entre 12.000 y 14.000 miembros. También tienen su propia fuerza aérea pero, a diferencia de las FARC, además pueden hacer uso de los helicópteros donados por Estados Unidos. Durante la segunda mitad de la década de 1990, el número de masacres –la mayoría de ellas, aunque no todas, perpetradas por paramilitares operando en tándem con los militares– se cuadruplicó. Con

⁴⁸ A diferencia de las FARC, el ELN nunca se ha beneficiado de la narcoeconomía, puesto que no cobra impuestos por el cultivo de coca en las zonas bajo su control, un legado de sus orígenes en la teología de la liberación.

la elección del presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002), la Administración de Clinton revalidó el compromiso de Bogotá con la «guerra contra las drogas», que procedió a financiar, bajo los auspicios del Plan Colombia, con la suma de 1.300 millones de dólares, la mayor parte de ellos reservados para la adquisición de armamento de fabricación estadounidense.

Al mismo tiempo, el gobierno de Pastrana marcaba un tercer intento de resolver la parálisis que aquejaba al sistema político. Con el apoyo de los *Cacaos*, un poderoso grupo de industriales y financieros que estaban a favor de entablar negociaciones con los insurgentes antes de declarar una guerra total, Pastrana inició un «proceso de paz» con las FARC en el que, como medida preliminar, se procedió a crear una zona desmilitarizada con la retirada, en noviembre de 1998, de las fuerzas armadas de un área aproximada de 16.200 hectáreas. Al final de 1999, ambas partes habían dado su aprobación a un programa donde se concretaban doce puntos para ser negociados, que incluía temas relativos a la reforma agraria, a los derechos humanos, a los recursos naturales y a la reestructuración socioeconómica. Pero Pastrana tenía menos capacidad real que Betancur para responder de los acuerdos a los que pudiera llegar sobre estas cuestiones. A pesar de los momentos álgidos que ocasionalmente se produjeron —uno tuvo lugar a principios del año 2000, cuando representantes de las FARC y autoridades del gobierno colombiano iniciaron un «viaje de reconocimiento» por las capitales europeas; otro se produjo en junio de 2001, cuando las FARC liberaron a 363 soldados y policías capturados a cambio de once (no los cincuenta prometidos) de sus miembros—, el proceso de paz se malogró. Las FARC se retiraron en varias ocasiones de las negociaciones preliminares a causa de la falta de voluntad del gobierno para refrenar la propagación de las fuerzas paramilitares y utilizaron la zona desmilitarizada para prepararse para la batalla futura, al mismo tiempo que denunciaban, no sin razón, que el Plan Colombia era, efectivamente, una declaración de guerra.

Independientemente de sus muchos tropiezos estratégicos y tácticos, difícilmente se puede culpar a las FARC de su escepticismo. La historia colombiana ha enseñado durante mucho tiempo que «negociación» quiere decir preparación para la guerra y que, para las guerrillas, la «amnistía» es sinónimo de ejecución extrajudicial. Durante todo el periodo que duró la presidencia de Pastrana, las AUC, sostenidas por los rancheros de ganado y los narcoparamilitares, alineadas con facciones del ejército y de la policía, no dejaron de masacrar a la base social de las FARC y del ELN. Finalmente, el 20 de febrero de 2002, bajo la intensa presión del ejército, de los segmentos más pujantes de la clase dominante y de los medios de comunicación, Pastrana ordenó a las fuerzas armadas colombianas recuperar la zona desmilitarizada⁴⁹.

⁴⁹ Véase Garry LEECH, *Killing Peace; Colombia's Colombia and the Failure of US Intervention*, Nueva York, 2001.

¿Cuáles eran los grupos de presión más importantes detrás de este revés en el curso de los acontecimientos? Junto a las compañías multinacionales plataneras, a los productores de aceite de palma y a las plantaciones de flores, los magnates del narcotráfico y los rancheros de ganado de Antioquia y de Córdoba se habían asegurado de estar protegidos de los efectos de las políticas agrícolas neoliberales. Todos estaban rotundamente en contra del proceso de paz de Pastrana y apelaban y exigían la intensificación de la violencia a cargo del Estado contra la insurgencia, definida en términos generales para incluir a toda persona que trabaja para promover una transformación social progresista⁵⁰. Su candidato en las elecciones de 2002 fue Álvaro Uribe Vélez, quien, en palabras de Castaño, era «el hombre más próximo a nuestra filosofía».

Carne de ternera y cocaína

Como hemos visto, el ascenso de la familia Uribe, producido a mediados de la década de 1970, fue espectacular. Educado en Harvard y en Oxford, después de la precipitada e insólita buena fortuna de su padre, Uribe ocupó el cargo de senador del Partido Liberal durante dos legislaturas, desde 1986 a 1994. Como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, emprendió la «legalización y regulación» de las milicias antiguerrilleras mediante la creación de «Zonas del Orden Público» e impulsó los *Convivires*, o Comités de Vigilancia Rural, concebidos por el ministro de Defensa de Gaviria, Rafael Pardo, y con una estructura similar a la de las rondas campesinas peruanas o a las Patrullas de Defensa Civil guatemaltecas de la década de 1980. En el transcurso de dos años, los *Convivires* habían desplazado, aproximadamente, a 200.000 campesinos, principalmente de Urabá. Amnistía Internacional y otros grupos que trabajan por los derechos humanos señalaron las íntimas conexiones entre los *Convivires* y los paramilitares. La unidad orgánica entre ambos era manifiesta: al final de 1999, cuando el Tribunal Constitucional proscribió a los *Convivires* por las numerosas masacres de civiles desarmados, sus soldados a sueldo simplemente pasaron a integrarse en las filas de las AUC.

El rancho de Uribe en Córdoba colinda con el de Salvatore Mancuso, el comandante militar de las AUC y de quien Estados Unidos requiere la extradición, como también de Carlos Castaño. Uribe finge que la única relación que mantiene con él es de vecindad. El general Rito Alejo del Río, que había sido destituido por Pastrana debido a sus vínculos con los paramilitares, fue uno de los pilares sobre los que se apoyó en su campaña para ganar la presidencia en 2002; el otro fue Pedro Juan

⁵⁰ Los gigantes del petróleo como Occidental y BP Amoco también se oponían al proceso de paz. Todo estos grupos utilizaban a grupos paramilitares a modo de póliza de seguro capitalista.

Moreno Villa⁵¹. La indignación con la que el Estado y los medios de comunicación estadounidenses trataron a Samper, salpicado únicamente por recibir las aportaciones a la campaña de los señores de las drogas, vista retrospectivamente, parece cómica. Las conexiones de Uribe con el núcleo interno del narcotráfico y con sus formas específicas de practicar el terrorismo son mucho más estrechas. Con todo, también ha sido calurosamente acogido por la oligarquía colombiana, cuyo altavoz, *Semana*, le declaró «hombre del año» en 2002.

Uribe fue elegido basándose en un programa electoral simple y claro. No habría más intentos de tratar con la subversión. La única solución a la insurgencia era extirparla, con puño de hierro. Sus primeras actuaciones como presidente fueron declarar el estado de emergencia –el 11 de agosto, apenas cuatro días después de su nombramiento– y abrir «negociaciones» con la ACCU, la comandancia paramilitar regional (Córdoba-Urabá) que ha sido la peana del poder de Castaño desde que en 2002 anunció que iba a dejar su puesto en la AUC por su fracaso para restringir el tráfico de drogas (un gesto considerado por muchos como un primer paso para trazar un acuerdo con la DEA estadounidense que le permitiría entrar en la arena política)⁵². Sin embargo, la AUC no había aún desaparecido cuando ya había nacido de nuevo. La forma más rápida para Uribe de cumplir con su promesa electoral de un «fortalecimiento» de las fuerzas armadas sería amnistiar y dismantelar a los paramilitares como paso previo para reclutar a sus endurecidas tropas en el ejército colombiano. Mientras tanto, ha creado un impuesto especial sobre la riqueza para financiar el esfuerzo bélico, que complementa los 2.000 millones de dólares desembolsados hasta el momento en aplicación del Plan Colombia. Se prevé que al final de su ejercicio el presupuesto destinado a las fuerzas militares y policiales se haya disparado desde el 3,5 al 5,8 por 100 del PIB. Actualmente, tanto las tropas como los aviones y la tecnología de vigilancia estadounidense están operando en Colombia para prestar apoyo –o asesoramiento– en las campañas de «exterminio de forajidos» que están en marcha.

Guerra a muerte

Las principales zonas ocupadas por las FARC en el sureste han sido declaradas «Zonas Militarizadas Especiales». En el norte, Arauca, Sucre y Bolívar han sido declaradas «Zonas de Consolidación y Rehabilitación». En estos lugares no se encuentra ni a autoridades civiles ni a inspectores de derechos humanos, sino a miembros del ejército tomando decisiones administrativas. El 31 de marzo de este año, 16 periodistas salieron de Arauca bajo amenaza de muerte poco antes de que un colega fuera asesinado. El Congreso, donde se

⁵¹ J. Contreras y F. Garavito, *El Señor de las Sombras: Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*, cit., pp. 35-43, 65-72, 92 y 167.

⁵² Gary LEECH, «Reinventing Carlos Castaño», www.colombiareport.org.

calcula que entre el 20 y el 30 por 100 de los diputados está vinculado a las AUC, está deliberando un proyecto de ley para intensificar aún más las restricciones a la prensa⁵³. Un segundo proyecto pondría a las ONG que trabajan por los derechos humanos, y a las que varios generales colombianos han equiparado recientemente con organizaciones «subversivas», bajo una extrema vigilancia. En 2002, fueron asesinados 17 activistas que defendían los derechos humanos y si el proyecto alcanza el rango de ley, no cabe duda de que este número crecerá. A finales de junio de 2003, se aprobó el proyecto de una nueva ley antiterrorista que otorga a los militares poderes policiales a escala nacional. Y el principal objetivo de Uribe, consistente en reclutar un millón de informadores a sueldo para colaborar con el gobierno, ha sido superado: se ha contratado a 500.000 más.

Los costes humanos de esta campaña saltan a la vista. A finales de junio de 2003, cuatro líderes indígenas en el pueblo Cuna de Paya, en el lado panameño de la frontera, murieron a manos de soldados pertenecientes al Bloque Élder Cárdenas de las ACCU, y el resto de los pobladores fueron desplazados con el fin de limpiar el camino para la autopista panamericana, un prerrequisito para la implementación del ALCA. Tanto esta vía como los acuerdos comerciales beneficiarán a los rancheros de ganado, a los propietarios de las plantaciones de aceite de palma, a las compañías madereras y a las multinacionales plataneras que desarrollan su actividad en Urabá y que contribuyen financieramente a las ACCU. La supremacía blanca se erige sobre este «proyecto de desarrollo y de libre mercado» que para los afrocolombianos, así como para los cuna y los embera, es el presagio de la masacre o del desplazamiento⁵⁴. Aunque oficialmente no se encuentre previsto en las «negociaciones de paz» entre el gobierno y las ACCU/AUC, no cabe duda de que los soldados pertenecientes a estos grupos continuarán operando con impunidad a lo largo de la frontera con Panamá. Como lo harán los pertenecientes al Bloque Metro, un comando «disidente» de las ACCU que ha tomado el control de la zona Comuna 13 de Medellín —el lugar destinado a ser ocupado por la entrada del proyectado Túnel del Oeste que conduce a Urabá— tras la Operación Orion ordenada por Uribe a mediados de octubre, que movilizó a 3.000 efectivos de las fuerzas de tareas conjuntas, y en la que murieron docenas de civiles, cientos fueron arrestados y miles de ellos desplazados⁵⁵.

Hasta ahora, siguiendo a pies juntillas las órdenes de sus superiores imperiales, Uribe ha reunido tras de sí a la élite política y a una miope clase media. A mediados de enero de 2003 fue generosamente recompensado

⁵³ Véase Julia SWEIG, «What kind of War for Colombia?», *Foreign Affairs* (septiembre-octubre de 2002).

⁵⁴ Alfredo MOLANO, «Cacarica y Paya», *El Espectador*, 26 de enero de 2003.

⁵⁵ «OO», alias *Rodrigo*, el líder del Bloque Metro, ha expresado su disposición a enfrentarse a su mentor, Castaño, antes que negociar con Uribe. Él insiste en que los narcos se han apropiado de los negociadores. Lo que ha dado lugar a una microguerra fratricida entre las ACU y el Bloque Metro librada en Medellín y en sus alrededores.

por sus esfuerzos cuando el Banco Mundial aprobó un préstamo a cuatro años de 3.300 millones de dólares y el FMI un préstamo condicional [*stand-by loan*] por la suma de 2.100 millones de dólares. Desde 1993, el gasto militar colombiano se ha disparado desde 360 millones de dólares hasta alcanzar los 815, mientras que la deuda externa, que representaba en 1996 el 30 por 100, ahora supone el 55 por 100 del PIB. En abril de este mismo año, Colombia se convirtió en el único país de América Latina que participó en la «coalición» angloamericana formada para la invasión de Iraq. No es un secreto que, a cambio, el Congreso estadounidense recompensó a Uribe, a principios de abril, con una aportación adicional de 104 millones de dólares, mientras que el Banco Internacional para el Desarrollo aprobó la concesión de un préstamo de 1.600 millones de dólares a principios de mayo, poco después de que Uribe se hubiera reunido en Washington con Paul Wolfowitz y con el general James Hill, responsable del Comando Sur estadounidense, para solicitar que el material bélico no utilizado en Iraq fuera enviado por vía marítima a Colombia⁵⁶.

Sin embargo, empiezan a escucharse los tambores de la disidencia. En abril de 2003, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el estado de emergencia decretado por Uribe y que desde agosto de 2002 ha sido prorrogado en dos ocasiones. En octubre, tuvo lugar una marcha masiva de protesta, dirigida por el CRIC, una organización indígena del Cauca. El referéndum de los 19 puntos que Uribe proyecta plantear al país, aplazando las elecciones y disponiendo un congelamiento del gasto público por un periodo de dos años y el recorte de las pensiones, ha levantado voces de descontento y podría verse en peligro por la abstención, en gran medida estimulada por la agitación sindical. También han surgido protestas acerca del plan de privatización de EMCALI, la compañía de servicios públicos y de telecomunicaciones, y de ECOPETROL. Uribe ha ablandado los regímenes de crédito en un intento de estimular una nueva expansión del consumo y de la construcción, inspirado en el modelo de Gaviria, pero ante el debilitamiento de la demanda de productos de importación desde Estados Unidos (y Venezuela), la caída de los precios del café y del petróleo y el marchitamiento del mercado mundial, las perspectivas económicas para su régimen no son halagüeñas.

Tierra quemada

Aun así, el destino del gobierno lo decidirá, definitivamente, el éxito de su campaña para acabar con la oposición armada al *capitalismo a la*

⁵⁶ En su visita a Bogotá a principios de diciembre de 2002, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, prometió que para el año 2003 concedería una ayuda militar a Colombia por valor de 537 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 25 por 100. El presupuesto de Estados Unidos para este año solicitaba destinar, en 2004, 533 millones de dólares para Colombia.

colombiana. Como hemos visto, la longevidad extraordinaria de las guerrillas en Colombia ha sido, principalmente, producto de cuatro factores: la oclusión del sistema político; la extensión de las fronteras agrícolas del país; su topografía sumamente dividida y accidentada, y las contingencias del *boom* de la coca. El armamento y los sistemas de vigilancia de alta tecnología, del tipo de los que fueron puestos a prueba en los Balcanes, Afganistán e Iraq, serán traídos para superar el tercero de estos factores. La fumigación aérea de extensas zonas rurales para destruir los cultivos de coca se encuentra ahora en pleno apogeo. Washington y Bogotá ya están proclamando el éxito sin precedentes de esta campaña. En diciembre de 2002, un estudio de la ONU anunciaba que el cultivo de coca en Colombia se había reducido un 30 por 100 en el pasado año, afectando a más de un millón de kilómetros cuadrados⁵⁷.

Actualmente, se destruyen casi 142.000 km² al mes. «Las ciudades dedicadas a la recolección y a la producción de cocaína han sido abandonadas semejando ciudades fantasma del viejo oeste estadounidense, sus tiendas están vacías, sus habitantes se han desvanecido», según recogía *Los Angeles Times* a principios de junio, y prosigue: «De los más de una docena de hacendados a quienes se entrevistó a mediados de mayo, ni uno sólo planeaba continuar con el cultivo de la coca. Las visitas recurrentes de los fumigadores acaban con la coca al igual que lo hacen con los cultivos de alimentos que están a su alrededor y les convencen para abandonar sus negocios»⁵⁸.

Esta fumigación ha sido una parte integral del Plan Colombia desde 2000. En la misma se han utilizado dosis sumamente concentradas de Round-Up Ultra fabricadas por Monsanto mezclado con Cosmo-Flux, un componente químico anteriormente proporcionado por ICI que hace que el glifosato se adhiera a todo lo que toca. Rociando este componente tóxico, los mercenarios estadounidenses han acabado con los peces, con la fauna y la flora, con el ganado, con ríos y con cultivos legales, además de con los campos de coca, por todo el territorio del sur de Colombia. La fumigación ha causado infecciones respiratorias y epidérmicas de modo generalizado entre la población civil, especialmente en los niños. Desde el 13 de febrero se han estrellado o han sido derribados tres aviones –dos de los cuales eran utilizados para fumigar los campos de coca– que operaban contratados por el Departamento de Defensa, lo que también le ha ocurrido a cuatro de sus helicópteros de escolta modelo Halcón Negro. Han muerto cinco mercenarios estadounidenses y un policía colombiano. Las FARC han declarado a otros tres mercenarios prisioneros de guerra y han sido movilizados 3.000 soldados colombianos para localizarlos. Cuarenta y nueve soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses fueron desplegados para colaborar en una misión de «búsqueda y rescate» a finales

⁵⁷ «Colombia Politics», *The Economist*, 5 de junio de 2003.

⁵⁸ T. Christian MILLER, «Major Cocaine Source Wanes», *Los Angeles Times*, 8 de junio de 2003.

de febrero y un centenar más ha llegado en el marco de la aplicación del Plan Colombia, lo que representa un incremento del 50 por 100 en las tropas estadounidenses estacionadas en el país durante los pasados seis meses⁵⁹.

Naturalmente, ante la ausencia de cualquier programa para la sustitución del cultivo, tal y como incluso ha señalado *The Economist*, el único resultado posible es el aumento tanto del terrorismo en las fronteras de la coca como del desempleo en las ciudades. Pero este coste ni siquiera es digno de atención por parte del régimen. Si las experiencias del pasado sirvieran para guiarse, la emulación del éxito alcanzado por la contrainsurgencia venezolana en Falcón en la década de 1960, o la de Fujimori en Ayacucho y el valle del Alto Huallaga en la década de 1990, requeriría la capacidad de movilizar a un electorado campesino tan hostil a las guerrillas como receptivo al clientelismo anticomunista, algo que nunca ha existido en las selvas y las llanuras tropicales del sureste. Queda por ver si la llegada del ejército colombiano y de los paramilitares que les acompañan la hará posible. Quemar la tierra desde el aire, hacer que sea imposible ningún tipo de vida económica en las zonas rebeldes, podría ser una alternativa, con reminiscencias del terrorífico eslogan acuñado por Estanislao Zulueta: «Si no podemos ni queremos modificar las circunstancias que determinan estas manifestaciones de miseria, marginación y desesperación, permítasenos, entonces, eliminar a sus víctimas». No obstante, una estrategia de acuerdo con estas líneas no alteraría la causa original de la insurgencia: la existencia de un orden político excluyente. Lo blindará todavía más. Tiempo atrás, en Perú, Fujimori proyectó una imagen –alguien que ha trabajado duro, que habla claro y que es enemigo implacable de la subversión– más o menos idéntica a la que hoy se atribuye a Uribe. No es probable que la elite civil de Colombia permita una trayectoria personal parecida. Pero nada indica que esté dispuesta a cambiar su sistema.

⁵⁹ Nicole Elana KARSIN, «Escalating UD Casualties in Colombia», 14 de abril de 2003: www.colombiareport.org.